

SERIE

**Documentos de trabajo
de la Escuela de Política
y Gobierno** (Nueva Serie)

DOCUMENTO 4

**LA DEMOCRACIA FUERA
DE LUGAR.
CHILE EN EL SIGLO XX**

Marcelo Cavarozzi



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN**

ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO



**UNSAM
EDITA**

Serie: Documentos de Trabajo de la Escuela de Política y Gobierno. Nueva Serie
Director: Ricardo Gutiérrez

Cavarozzi, Marcelo

La Democracia fuera de lugar. Chile en el siglo XX

1ª edición - San Martín: UNSAM EDITA de Universidad Nacional de Gral. San Martín, 2013.

(Documentos de Trabajo de la Escuela de Política y Gobierno. Nueva Serie / Ricardo A. Gutiérrez)

E-Book

ISBN 978-987-1435-63-0

1. Ciencias Políticas. 2. Democracia.

CDD 323

1ª edición, septiembre de 2013

© 2013 Marcelo Cavarozzi

© 2013 UNSAM EDITA de Universidad Nacional de General San Martín

UNSAM EDITA:

Campus Miguelete. Edificio Tornavía

Martín de Irigoyen 3100, San Martín (B1650HMK), provincia de Buenos Aires

unsamedita@unsam.edu.ar

www.unsamedita.unsam.edu.ar

Queda hecho el depósito que dispone la Ley 11.723

Editado e impreso en la Argentina

Prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo fotocopia, sin la autorización expresa de sus editores

LA DEMOCRACIA FUERA DE LUGAR. CHILE EN EL SIGLO XX

por Marcelo Cavarozzi

Introducción

El Chile clausurado por el brutal quiebre de 1973 ha sido víctima de dos cautivantes narrativas que influyeron, tanto sobre la política como sobre las interpretaciones históricas y sociológicas: la narrativa del Estado fuerte, obviamente autoritario, y la narrativa de la democracia. Más allá de algunos señalamientos acertados, ambas narrativas han contribuido a hacernos perder de vista los rasgos centrales de la dominación social y política en Chile y cómo esta se redefinió y transformó en una serie de coyunturas críticas a lo largo del siglo XX, asegurando así su mantenimiento, a pesar de los desafíos que enfrentó. La dominación, como veremos, se reprodujo precisamente descansando en la gestación y reproducción de atributos opuestos a los sostenidos por las narrativas convencionales. En otras palabras, la dominación social y económica se consolidó en el siglo XX al debilitarse el Estado y al negarse la democracia.

En la narrativa del Estado fuerte se parte de la rápida y relativamente incruenta resolución de los conflictos internos de las elites, que condujeron las luchas de la independencia y lograron erigir un Estado que desde Santiago, primero como capital del Valle Central y luego del país extendido, convirtió a Chile en una exitosa empresa de desarrollo exportador, conquistas territoriales y guerras de aniquilamiento en el transcurso de seis o siete décadas. En esta narrativa, los personajes centrales, e inicialmente excluyentes, fueron los miembros de una oligarquía reducida y concentrada en el Valle Central, es decir, la aristocracia terrateniente de las más de doscientas familias del “vecindario noble”, y los militares provenientes de esas familias.¹ Esta clase diri-

1 Cf. Arnold Bauer. *La sociedad rural chilena. Desde la conquista a nuestros días*. Santiago de Chile,

gente se expandió durante el siglo XX; se incorporaron a ella elencos técnicos, que provenían del servicio público, de grandes empresas privadas y de las asociaciones corporativas de los empresarios, como así también intelectuales de diferentes linajes.

La narrativa de la democracia, por su parte, se remonta también a mediados del siglo XIX y repara en la propensión sistemática de las distintas facciones oligárquicas, y posteriormente también de las clases medias y populares, a canalizar sus demandas a través del parlamento y a organizarse en partidos políticos. Esta narrativa se apoya en dos pilares: la continuidad del funcionamiento del congreso hasta el golpe de 1973 –que solo sufrió un par de breves interrupciones entre 1924 y 1932– y el prolijo despliegue de un arco de partidos políticos, que abarcó desde los tradicionales Conservadores y Liberales de derecha hasta dos partidos de izquierda que reivindicaron diferentes versiones del marxismo. Este arco incluyó también un par de fuerzas que, en contraste con las anteriores, fueron catalogadas a veces como partidos de la clase media y otras como partidos “de centro”: los Radicales y los Demócratas Cristianos. Naturalmente, los protagonistas de esta otra narrativa fueron los políticos partidarios.²

En este texto hago una lectura diferente de la historia política chilena del siglo XX, que es más contradictoria y promiscua.³ Esta perspectiva parte, por un lado, del reconocimiento de que la historia del Estado chileno siguió un itinerario más sinuoso que el planteado por el mito; se caracterizó por el contraste entre un Estado que se debilitó de manera progresiva a partir del último tercio del siglo XIX, pero que paradójicamente se convirtió durante el siglo siguiente en el eje de un proceso espasmódico de desarrollo y acumulación. Y, por otro lado, la perspectiva subraya una serie de cambios en los arreglos formales e informales del régimen político –cambios que se sucedieron en 1920, 1925, 1938 y 1949– que no se tradujeron siquiera mínimamente en la implantación de procedimientos democráticos. Recién en 1958, un par de reformas dispuestas en los meses postreros de un gobierno absolutamente despresti-

Andrés Bello, 1994, p. 35.

2 El historiador Gonzalo Vial sintetiza con precisión el mito de la democracia chilena, al que él obviamente se plegó, en su documentada historia del país. Cf. *Cinco Siglos de Historia*. Santiago de Chile, Zig-Zag, 2009, p. 1105. Según Vial “1932 abrió un período de 41 años, durante los cuales Chile –asombro y ejemplo del mundo– perfeccionaría sin cesar las formas democráticas, hasta el extremo de celebrar todas y cada una de sus elecciones: municipales, parlamentarias y presidenciales, ordinarias o extraordinarias, justa y precisamente el día que mandaba la Constitución... ni el día antes, ni el día después, se trata de llenar la Presidencia de la República, o un cargo de regidor comunal, cuyo titular hubiese fallecido sin completar su período”.

3 Michael Mann, al referirse a las configuraciones de poder de las sociedades modernas en la introducción al segundo tomo de su monumental *Las fuentes del poder* social, señala que concibe dichas fuentes como redes impuras y promiscuas, que se entretrejen entre sí. (Cf. Madrid, Alianza, 1997, p. 27) Como explico más adelante, en la distinción en tres planos que planteo en el texto: los de la sociedad, el Estado y el régimen, adopto una postura cercana a la del sociólogo inglés.

giado y sin capacidad alguna para influir sobre sus sucesores, incluyeron la implantación de una cédula electoral oficial y la legalización plena del partido comunista. Solo en esa coyuntura tardía se traspuso el umbral de nacimiento de la democracia, es decir, recién esas reformas inauguraron un sistema que, formalmente, puede ser calificado como democrático. No fue accidental que precisamente a partir de ese año, una coalición de partidos de izquierda emergiera como una alternativa real de poder.

La chilena fue, por ende, una democracia truncada; el bloqueo a la democracia fue el resultado de prácticas que, de manera consistente y eficaz, implementó la oligarquía, operando tanto desde las instituciones propiamente políticas, como fuera de ellas.

En el Chile contemporáneo, la fortaleza inicial del Estado se fue diluyendo a partir de la década de 1860. A pesar de ello, desde 1879 en adelante, es decir, después del estallido de la Guerra del Pacífico, se sucedieron varios episodios de expansión estatal de corta duración, que en algunos casos tuvieron efectos significativos, mientras que en otros se abortaron inmediatamente. Por su parte, la democracia política, sea que adoptemos una definición de corte dahliano o de corte schumpeteriano, se estableció tardíamente. Y cuando finalmente ocurrió, despertó enormes resistencias que llevaron a su rápida caída, precisamente porque cada una de las dos elecciones presidenciales posteriores a ese año, es decir las de 1964 y 1970, generaron saltos cuantitativos y cualitativos en los procesos de movilización de los sectores populares, como también explosiones de demandas que resultaron intolerables para la oligarquía y los grandes empresarios.

La democracia emergió en 1958 para derrumbarse quince años más tarde, sin revertir las condiciones que provocaron el retraso en su llegada. Por el contrario, la efectiva celebración de las primeras elecciones que cumplieron con los requisitos de una democracia formal, es decir, las presidenciales de 1958 y sobre todo las parlamentarias de 1961, profundizaron el antagonismo entre aquellas fuerzas que procuraron utilizar los mecanismos democráticos para cuestionar y erosionar los rasgos jerárquicos, autocráticos y escasamente igualitarios de la sociedad chilena y quienes procuraron, finalmente con éxito, impedirlo.

La docena de años transcurridos entre 1920 y 1932 fue una etapa decisiva, tanto en relación con el desarrollo del Estado como con la suerte de la democracia durante el siglo. Fue en esos años cuando surgió el patrón del crecimiento espasmódico del Estado y se sembraron las raíces para el tardío establecimiento de la democracia. A partir de ese período, una vez disipada la “inercia” residual del proyecto portaliano, no fue accidental que se sucedieran episodios, o “arranques”, para tratar de reconstruir al Estado.⁴ Esa fue una

4 Diego Portales es considerado por muchos analistas como el fundador del Estado moderno en Chile

etapa crítica, puesto que en ella emergieron tanto un conjunto de profundos cuestionamientos al régimen oligárquico, que tenía ya prácticamente un siglo de existencia, como también la multiplicación de los reclamos para que el Estado expandiera sus limitadas funciones y, de ese modo, sirviera para proteger a los sectores afectados por la crisis. Pero, como veremos, las demandas de un mayor intervencionismo estatal y de una reforma del régimen oligárquico, fueron canalizadas a través de mecanismos cargados de contradicciones, la mayoría de ellos de inspiración autoritaria. Así se generó una tensión, que permanecería sin resolverse hasta el golpe militar de 1973. Ello condujo a la formación de un régimen híbrido, liberal pero no democrático, en las tres décadas que siguieron a la depresión de 1929-1932, es decir, hasta principios de la década de 1960.

El período 1920-1932 se caracterizó, entonces, por una gran productividad política que, paradójicamente comenzó con una condena generalizada a la política, ya que esta comenzó a aparecer como la culpable de los males que afectaban a Chile —entre otros, el de la “inferioridad” chilena a la que se refirió Francisco Encina—.⁵ Esa fue una etapa en la que, asimismo, el vacío dejado por el agotamiento de la hegemonía británica fue prestamente llenado por la norteamericana, modelando como resultado un nuevo estilo de dependencia. Más allá de los resultados económicos de las empresas norteamericanas que operaron en Chile y del interés estratégico en el cobre, resulta particularmente intrigante por qué un país relativamente pequeño y lejano atraería la atención de personajes tan disímiles como Herbert Hoover, los impulsores de la Alianza para el Progreso y Henry Kissinger.

El Estado

Este trabajo propone una estructura analítica para el estudio de los “arranques” de expansión estatal, que se produjeron en Chile durante el siglo XX. Para ello se hace una lectura en detalle del primero de ellos —los años de la dictadura del coronel Carlos Ibáñez del Campo (1925-1931) en los que además del Banco Central se crearon numerosas instituciones públicas y se reformaron otras como el cuerpo de Carabineros— y la subsiguiente “normalización” de la política, que sobrevino en la década de 1930, durante la segunda presidencia de Arturo Alessandri. El objetivo, precisamente, es el de elaborar una herramienta analítica que permita desentrañar los rasgos centrales de la política chilena hasta que sobrevino el *coup d'état* de 1973. La premisa es que, durante el medio siglo inaugurado en la década de 1920, se produjo una peculiar alternancia: por una

en la década de 1830. Murió asesinado en 1837 en una rebelión militar, que finalmente fracasó.

5 Francisco Encina. *Nuestra inferioridad económica*. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1955. La versión original del libro fue publicada en 1911.

parte, se sucedió un puñado de arranques de expansión estatal, la mayoría de los cuales sedimentaron en “estratos” acumulativos de estatalidad –es decir, instituciones públicas y cuasi-públicas y pautas de conducta de los agentes estatales y de los actores sociales vinculados a ellos–; por la otra, los arranques de expansión, invariablemente, fueron seguidos por retornos a la “normalidad”, esto es, interregnos que tuvieron como resultado la neutralización, e incluso reversión, de las reformas impulsadas en los períodos de expansión estatal.⁶ Esta peculiar alternancia tuvo como resultado la consolidación del statu quo, es decir, de los patrones de dominación social heredados del siglo XIX.

Los episodios a los que me refiero, además de los analizados en el texto, son la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), que tuvo como eje la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y las políticas de promoción de la industria y de expansión de la infraestructura; y la primera etapa del gobierno democristiano de Eduardo Frei Montalva (1965-1969), en la cual el Estado implementó una profunda reforma agraria e impulsó la sindicalización campesina en el marco de un postrero y mediocre desarrollismo. En cada una de las coyunturas emergieron, a la par, propuestas autoritarias y de apertura democrática, pero, como examino más abajo, más como disyunciones que como contraposiciones de un juego antagónico. En todas ellas, el Estado, recuperando en parte el impulso inicial, generó transformaciones significativas en la sociedad, sobre la base del desarrollo de organizaciones públicas, la formación de cuadros técnicos y la ampliación de las capacidades de regulación y disciplinamiento social. Otros dos “arranques” de expansión estatal se frustraron desde su mismo lanzamiento. Estuvieron asociados, el primero con el retorno a la presidencia de Carlos Ibáñez, en 1952 (esa vez ya constitucionalmente electo), y el segundo con la administración de Jorge Alessandri (1958-1964), inmediatamente a continuación de la de Ibáñez. Los prolongados interregnos de normalidad, a su vez, encapsularon las iniciativas de los períodos de activismo estatal morigerando, o incluso anulando, su impacto. Como ya apunté, este patrón de alternancia tuvo como efecto producir un congelamiento casi total de la dominación social y los parámetros a los que estuvo asociada, una sociedad extremadamente jerárquica en la cual predominó una pronunciada desigualdad.

La matriz de dominación se gestó durante el primer siglo de vida independiente de Chile, al compás del despliegue de los intereses y los valores de

6 La idea de la sedimentación de los estratos de estatalidad, la desarrollo en “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina”, *Revista de Estudios Políticos* N° 74 (octubre-diciembre, 1991) y en una versión revisada en el *Journal of Latin American Studies* 24, 1992. En él postulo que este peculiar estilo de expansión estatal fue característico de la matriz Estado-Céntrica en el período que medió entre las décadas de 1920 y 1970. Chile es uno de los clásicos ejemplos de esta modalidad de imbricación de economía y política.

la elite que lideró la guerra contra la corona española y que, como bien señala José Bengoa, se transformaría en “una oligarquía” durante el último tercio del siglo XIX.⁷ De todos modos, la continuidad entre la elite colonial y la oligarquía nacional fue mayor que la que se dio en otros países hispanoamericanos, y este fenómeno tuvo bastante que ver con el modo de relación entre los dueños de fundo y los campesinos, que se armó, de acuerdo con Arnold Bauer, “entre fines del diecisiete y comienzos del diecinueve”.⁸ El despliegue del proyecto portaliano durante las presidencias de Prieto, Bulnes y Manuel Montt descansó, como señaló Jocelyn-Holt, en un condominio oligárquico-militar, que reforzó la expansión del comercio de exportación basado en el trigo, el cobre y la plata y ubicó a Chile como la única república latinoamericana “seria” dentro del concierto mundial que estaba armándose con eje en Londres, y subsidiariamente en París.⁹ Por ello, no resultó casual que Chile se constituyera en el único ejemplo en la región que no cayó dentro del patrón de “tiranías militares sucesivas y de frecuente ascenso de salvajes tiranos”, como tan coloridamente lo pintó uno de los influyentes consejeros extranjeros que pasaron por Chile, el francés Courcelle-Seneuil.¹⁰ Fue el de los “pelucones” de Portales un proyecto decididamente estatista, aunque no contrarió en modo alguno a la filosofía de libre comercio que el *premier* británico Palmerston, sus sucesores y sus aliados de la *city* londinense impulsaron a nivel mundial. Los presidentes del período que se cerró en 1861, consiguieron establecer una cierta estabilidad institucional, neutralizando trabajosamente las rebeliones militares y regionales y centralizando la autoridad política y administrativa en Santiago. En síntesis, se formó un Estado que alimentó y creció paralelamente a la idea de una nación chilena. Como es sabido, la capital se convirtió en un refugio para exiliados, ensayistas y políticos provenientes de regiones más

7 Cf. José Bengoa (ed.). *Valle Central. Memorias, patrimonio y terremoto en haciendas y pueblos de Chile Central*. Santiago de Chile, Catalonia, 2012.

8 Bauer también remarca que los procesos desarrollados durante el siglo XVIII tuvieron como resultado la estructuración de un sistema definido por una “estricta estratificación”. (Cf. *La sociedad rural chilena*, p. 67) Como corroboración adicional, si bien de carácter puntual, cabe registrar el señalamiento que hace Juan Carlos Garavaglia en “Servir al Estado, servir al poder: la burocracia en el proceso de construcción estatal en América Latina”. *Almanack. Guarulhos Nº 3 de la América española*, primer semestre de 2012, p. 7. El autor marca a Santiago como una excepción a la regla predominante en otras ciudades capitales, como Quito, Santa Fe de Bogotá y Buenos Aires, ciudades estas últimas en las cuales los fiscales y oidores de las Audiencias desaparecieron rápidamente de la escena después de la independencia, mientras que en Chile ese no fue el caso; muchos de ellos permanecieron en sus cargos. Por ende, en Chile la continuidad entre la colonia y el período poscolonial fue mayor.

9 Cf. Alfredo Jocelyn-Holt Letelier. *Historia General de Chile. Amos, señores y patricios*. Santiago de Chile, Sudamericana, 2004. Otros historiadores, como Gabriel Salazar, relativizan el peso del “proyecto” atribuido a Diego Portales y sus asociados cercanos.

10 Jean Baptiste Courcelle-Seneuil fue uno de los más destacados discípulos de Alexis de Tocqueville y arribó a Chile como catedrático universitario en la década de 1850. Desempeñó también funciones como asesor del gobierno de Manuel Montt.

turbulentas del continente, mientras que Valparaíso desplazó al Callao como principal puerto sudamericano del Pacífico y funcionó como trampolín para los muchos chilenos que transitaron las costas hasta California, algunos para hacer más negocios y otros para escapar a la asfixiante “paz social” del Valle Central. De todas maneras, el chileno de mediados del siglo XIX era un Estado precario: el bandolerismo rural no había sido erradicado, ni siquiera en las regiones centrales; el avance sobre los territorios de los mapuches fue mínimo y, para colmo, en 1865 un almirante español, quien finalmente reveló no estar del todo en sus cabales, bombardeó a Valparaíso destruyendo buena parte del puerto sin que los militares chilenos pudieran hacer mucho para impedirlo.

En 1861, el fin de la presidencia de Montt trajo a la superficie un problema típico de los regímenes presidencialistas oligárquicos: la sucesión. El presidente saliente fracasó en el intento de imponer a su sucesor y se abrió un período en el cual los sucesivos presidentes sufrieron la disminución progresiva de sus atribuciones para nombrar tanto a funcionarios públicos, como a los encargados de organizar y supervisar los procesos electorales. Como en otros regímenes oligárquicos de la región y de Europa, el control de las elecciones era un arma decisiva en el armado de la estructura de poder en Chile, y a partir de la sucesión de Montt, el poder central fue cediendo prerrogativas que prácticamente durante un siglo —es decir, hasta las reformas de las leyes electorales en 1958— pasaron a manos de caciques locales. La progresiva pérdida de poder de los presidentes, que obviamente se aceleraría a partir de la derrota del presidente Balmaceda en la guerra civil de 1891 y el establecimiento de la república parlamentaria, no fue ajena al estancamiento casi total del proceso de construcción estatal que había caracterizado al período fundacional. A partir de la década de 1860, la formación de cuerpos burocráticos y técnicos perdió continuidad y la estabilidad de sus ocupantes se tornó más precaria; en una sociedad que estaba ganando en complejidad al compás de su progresiva integración a la economía mundial, fueron encogiéndose las capacidades de regulación estatal. Durante los años de la guerra del Pacífico, empero, no resultó extraño que el Estado chileno revirtiera temporariamente el declive; las necesidades de la guerra y de la ocupación de los territorios que habían pertenecido a Bolivia y Perú obligaron a los chilenos a desplegar las estructuras de control territorial y social y de comunicaciones en regiones que no las tenían.

De todos modos, a pesar de su progresiva involución, el Estado chileno nunca perdió eficacia como aparato disciplinador de los sectores dominados. No dejó de funcionar rutinaria y persistentemente como un Estado de clase, racista y patriarcal, que reprimió y excluyó a los trabajadores, los campesinos, los indígenas y las mujeres. Uno de los primeros estudiosos en reparar en el carácter bifronte del Estado chileno —es decir, un Estado que fue, a la vez, débil y fuerte— fue Albert O. Hirschman, en su clásico *Journeys Toward Progress*.

El economista alemán apuntaba que los *Decision Avoiders* que controlaron la política chilena entre 1891 y la Primera Guerra Mundial, fracasaron en el control de la inflación, pero no vacilaron en desatar algunos de los “baños de sangre más terribles de la historia del movimiento obrero”, como la producida a raíz de la matanza de los obreros salitreños y sus familias en la plaza central de Iquique en 1907.¹¹

La democracia

Por su parte, la democracia emergió tan tardíamente en Chile que se podría postular que su establecimiento coincidió casi temporalmente con su caída. A pesar de la elegante policromía de su espectro partidario y del parsimonioso gradualismo con que se fue armando, el régimen político chileno no alcanzó niveles de participación y competencia que permitieran considerarlo siquiera formalmente democrático, hasta muy poco antes de su derrumbe en 1973. En primer lugar, hasta la década de 1950, el tamaño del electorado fue extremadamente reducido, característica que Atilio Borón se encargó de señalar en un artículo en el cual también destacó el escaso éxito que tuvieron las izquierdas en ampliar el electorado.¹² En buena medida, esto se debió a las “complicaciones”, que fueron deliberadamente mantenidas, en los procedimientos de registro electoral, como apuntaron, entre otros, Carlos Huneeus y Timothy Scully. Para los pobladores rurales, especialmente, resultaba extremadamente difícil inscribirse en los registros si no contaban con el visto bueno de los caciques locales, habitualmente aliados de los terratenientes. Unos y otros, los dueños de los grandes fundos y sus amigos proveían los liderazgos de los partidos de derecha, o integraban las filas de las distintas facciones del liberalismo y el conservadurismo. Asimismo, el manejo relativamente discrecional que dichos caciques tenían de los procesos electorales facilitaba el fraude, que era práctica habitual en las comunas rurales, como lo ha señalado, entre otros, Gonzalo Vial.¹³ En contra de la enconada resistencia de Liberales y Conservadores, los procedimientos de registro y de escrutinio ganaron en transparencia recién a partir de la sanción de la Ley 12.889, en 1958, reforma que incluyó el establecimiento de una cédula oficial. El intento anterior de limpiar los registros electorales había sido el de la reforma electoral y municipal de 1914, que transfirió la prerrogativa de inscribir como votantes y supervisar los actos electorales a las juntas de

11 Cf. Albert Hirschman. *Journeys Toward Progress*. New York, Anchor Books, 1965, p. 233. En apoyo de su tesis, Hirschman recordaba un dicho de un prominente presidente de la etapa oligárquica, Ramón Barros Luco, quien sostenía que “... solo hay dos clases de problemas, los que resuelven por sí mismos y los que no se resuelven”.

12 Atilio Borón en “Movilización política y crisis política en Chile (1920-1970)”. *Aportes*, abril, 1971, p. 20.

13 Gonzalo Vial, *op. cit.*

mayores contribuyentes, en lugar de los alcaldes municipales. Felipe Portales, criticando a Arturo Valenzuela y Scully, apunta correctamente la paradoja de la reforma de 1914: la depuración de los registros electorales constituyó un avance, ya que disminuyó la capacidad de las maquinarias partidarias locales para implementar algunas de las múltiples variantes del cohecho, pero tuvo como efecto la reducción del número de ciudadanos que supuestamente tenían derecho a voto de 598.000 a 185.000.¹⁴

En segundo lugar, las posibilidades efectivas de competencia electoral resultaron seriamente afectadas por las restricciones, a menudo severas, que se le impusieron de manera sistemática al partido Comunista, circunstancia que no excluyó el que a menudo también se le aplicaran a otros partidos de izquierda de menor importancia. Estas restricciones cobraron mayor relevancia que en el resto de América Latina, puesto que el chileno fue prácticamente el único partido Comunista de la región con presencia significativa en el mundo obrero, lo que se tradujo tanto en su predominio en la esfera sindical como en el comportamiento electoral de los trabajadores.¹⁵ Esta presencia fue muy extendida en el sector de los trabajadores mineros, tanto del salitre y el cobre como del carbón, pero el apoyo a los dirigentes sindicales del partido de la III Internacional no se restringió a ese sector. Por ello, las proscripciones y las persecuciones que sufrieron los comunistas durante el siglo XX no solo estuvieron vinculadas al propósito de bloquear electoralmente al partido, sino que también procuraron erradicar las conductas contestatarias de los trabajadores, fueran estas promovidas por los comunistas, los anarquistas u otras corrientes sindicales. El anticomunismo chileno estuvo profundamente arraigado en el encono que despertaban en las clases propietarias, los reclamos de los trabajadores, sentimiento que también embargó, o fue absorbido por otros sectores de la sociedad. Esta circunstancia está estrechamente relacionada en parte, con la intensidad que alcanzó el clivaje de clases en Chile, o dicho de otro modo, explica la subsistencia de un profundo corte jerárquico entre patricios y plebeyos, anclado en la sociedad rural tradicional, y que sobrevivió en la modernidad urbana. Este fenómeno condujo a que sectores significativos de las clases medias, generadas por la expansión del capitalismo, se sintieran parte del patriciado y, como consecuencia, condenaran *tout court* la rebeldía del “ro-

14 Felipe Portales. *Los mitos de la democracia chilena. Desde la Conquista hasta 1925*. Volumen I. Santiago de Chile, Catalonia, 2011. Cabe anotar que si bien la reducción implicaba probablemente la eliminación de centenas de miles de votantes ficticios, el resultado práctico fue que el tamaño de la ciudadanía se redujo a un nivel ínfimo. En comparación con Uruguay y Argentina, que en esa misma década habían expandido considerablemente el número de votantes y reducido las restricciones, en Chile se produjo un retroceso a niveles comparables con los del siglo previo.

15 Si bien en otros países como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y México, los partidos que respondían a la Segunda Internacional tuvieron influencia sobre otros ámbitos, como el intelectual y el universitario, nunca llegaron a desarrollar un apoyo comparable al que alcanzaron en las filas de clase trabajadora chilena.

to”, o sea “las faltas de respeto” a los superiores de sujetos considerados como inferiores sociales.

El anticomunismo que impregnó a la sociedad no fue, entonces, solamente un rasgo político. Pero, de todos modos, le dio al régimen político chileno características que se pueden definir como “predemocráticas”, y lo hizo compartir rasgos del sistema alemán de entreguerras más que del francés, como ha sostenido, entre otros, Samuel Valenzuela.¹⁶ En este sentido, no se debe olvidar que, tanto en Chile como en la república de Weimar, la puesta en funcionamiento de normas democráticas, respectivamente en 1958 y 1918, que casualmente en ambos casos sobrevivieron solo quince años, culminó con derrumbes catastróficos y en el establecimiento de dictaduras totalitarias. Si se me permite la licencia, aplicaría a la democracia en Chile la imagen de Marx en relación con el advenimiento de la libertad en Alemania, cuando el filósofo alemán se lamentaba que en 1848 “... solo acompañamos a la libertad un día, el de su entierro”.¹⁷

La apertura de las esclusas a la participación y a la competencia partidaria irrestricta, entre 1958 y 1973, produjo el estallido del sistema de partidos, heredado de la etapa “predemocrática”, estallido que fue preanunciado por un descalabro inicial, es decir, el asociado al llamado “terremoto ibañista” de 1952, cuando el ex dictador retornó a la presidencia. Después de lo que pareció un retorno a un ordenamiento normalizado del arco partidario en las elecciones presidenciales de 1958, retorno que inmediatamente se reveló inestable, la década siguiente iba a generar una nueva arquitectura: el esquema tripartito formado por la derecha (el partido Nacional en el cual convergieron liberales y conservadores), el centro (la Democracia Cristiana) y la izquierda (primero como Frente de Acción Popular –FRAP– y luego como Unidad Popular), proponiendo la “vía pacífica” al socialismo. Sin embargo, como ha señalado agudamente Manuel Antonio Garretón, este nuevo arreglo contenía la semilla de su destrucción, en la medida en que cada uno de los tres polos se concibió como alternativa excluyente de los otros dos.¹⁸ Esa inestabilidad extrema se manifestó en cada elección a partir de 1952. En ese año se terminó de deshacer la configuración partidaria que funcionó durante la década y media de presidencias radicales, inaugurada en 1938. Esa configuración le había permitido

16 J. Samuel Valenzuela en “La ley electoral de 1890 y la democratización del régimen político chileno”, *Estudios Públicos* 71 (invierno, 1998). La reticencia a reconocer el paralelo entre la Alemania derrotada en la primera guerra y el Chile que emergió del segundo ibañismo quizás se deba a que en el primer caso hubo un nítido cambio de régimen, al derrumbarse el absolutismo imperial de los Hohenzollern, mientras que en Chile durante 1958 se mantuvo una continuidad institucional, que ya tenía más de un cuarto de siglo de vigencia.

17 Cf. François Furet. *Marx y la Revolución francesa*. México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 49.

18 Cf. Manuel Antonio Garretón. *The Chilean Political Process*. Boston, Unwin Hyman, 1989.

al partido Radical disponer del apoyo de los partidos de izquierda, o al menos de alguno de ellos, en las contiendas presidenciales, a pesar de que en el parlamento se recostaba habitualmente a la derecha, aliándose a Conservadores y Liberales. Es decir, el radicalismo había funcionado como el eje basculante del sistema partidario, lo que le permitió capturar la presidencia en tres ocasiones sucesivas, a pesar de que su caudal electoral nunca superó el 25%. En cambio, desde 1952 en adelante, en las diez elecciones que se sucedieron hasta la previa al golpe de septiembre de 1973, que se celebró pocos meses antes del mismo, se conformó una configuración de partidos radicalmente diferente a la anterior. No se trató simplemente de que en cada comicio variara el partido o coalición triunfante, sino que en todos los casos se modificaron tanto la composición del elenco partidario en relación con la elección anterior, como también la posición que cada uno de los partidos ocupó en el tablero electoral.¹⁹

De lo señalado hasta aquí se desprende que el itinerario seguido por el Estado chileno fue mucho más tortuoso que lo sugerido por la narrativa del Estado fuerte y que, por su parte, la narrativa de la democracia tiene un talón de Aquiles. Tanto los analistas como numerosos actores han confundido lo que, sin duda, constituyó un caso de estabilidad institucional, que perduró durante más de cuarenta años, con un fenómeno de vigencia de los principios de soberanía popular. Por lo tanto, ambos planos de la política chilena, el del Estado y el del régimen político, deben ser analizados teniendo en cuenta los desvíos y las contradicciones que los afectaron, así como los entrelazamientos y promiscuidades a las que alude Mann. De todos modos, tanto el análisis de la formación y las rutas seguidas por los Estados latinoamericanos tempranamente exitosos, es decir, los de México, Argentina, Brasil y Chile, como el estudio del diseño de los mecanismos del régimen político tornan conveniente dar un paso adicional. Para ser más precisos, resulta extremadamente útil vincular en qué tipo de sociedad el Estado y el régimen operaron, y para esto es necesario determinar cuáles fueron las cuestiones sociales que se dilucidaron a través de la gestión estatal, y de qué manera ello se dio, como así también reparar en cuáles fueron los mecanismos y patrones de reclutamiento de las elites gobernantes. Como veremos, en este caso un punto de partida sugerente para responder a esos interrogantes remite al análisis del papel que jugó la oligarquía terrateniente en la sociedad chilena, en el siglo transcurrido entre las décadas de 1860 y 1960.

19 Se debe recordar que antes del golpe militar de 1973 las elecciones presidenciales se celebraban sexenalmente, mientras que las de renovación parlamentaria tenían lugar cada cuatro años. Por ello, en Chile hubo elecciones nacionales en 1952, 1953, 1957, 1958, 1961, 1964, 1965, 1969, 1970 y 1973. Al margen, cabe anotar que no era irrelevante para el presidente en ejercicio, esto es, *the incumbent*, para aludir a un término no traducible, si la primera contienda electoral que debían afrontar se producía al principio de su mandato (como fue en los casos de Ibáñez y Frei Montalva), o a mediados del mismo (como le ocurrió a Jorge Alessandri y a Salvador Allende).

La dominación oligárquica como herramienta heurística

Este trabajo se propone plantear algunas pistas acerca de cómo la dominación se jugó en la trama de los tres planos ya mencionados, el de la sociedad, el del Estado y el del régimen político. En los tres, la implantación de la oligarquía fue un elemento central, para las lógicas de generación e intercambio de recursos de poder, tanto materiales como simbólicos. En el primero, o sea en el plano de la sociedad, su papel central definió un patrón de organización profundamente jerárquico, que tuvo mucho que ver con la desigualdad extrema que imperó (e impera) en Chile. Si bien este patrón solo se desplegó materialmente en el ámbito rural a través de un proceso de “re-arcaización” de las relaciones sociales, si se me excusa el término, y de gestación de un patrón de servidumbre tardía, también tuvo como efecto impregnar al conjunto de la sociedad chilena. En el plano del Estado, a raíz de la pérdida de importancia de las exportaciones agrícolas, la oligarquía se transformó, a partir de las postrimerías del siglo XIX, en una clase parasitaria que colonizó a organismos y empresas del Estado y que convirtió a la apropiación de las rentas públicas prácticamente en el principal, y casi excluyente, mecanismo a través del cual accedió al control de cuantiosos recursos económicos. Otros sectores propietarios, en particular la incipiente burguesía industrial, incluso desde muy temprano, reprodujeron esa modalidad rentística de apropiación.²⁰ En este sentido, los industriales estuvieron marcados por el mismo episodio del surgimiento de la entidad corporativa que los representó, pues fue la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA en adelante) la que promovió la creación de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA en adelante), en 1883. Asimismo, la oligarquía, primero como productora y luego como intermediaria, tuvo un peso determinante en la construcción de los mecanismos estatales que modelaron el patrón de inserción de la economía chilena en el sistema capitalista mundial, en tres diferentes etapas; la de 1850-1880 (definida por la integración temprana con base en el comercio del Pacífico de trigo, plata y cobre); 1880-1925 (la era del salitre con la centralidad británica) y 1925-1970 (la era de la hegemonía norteamericana asociada al retorno del cobre al primer lugar en las exportaciones). Finalmente,

20 Ricardo Donoso, uno de los biógrafos más tempranos de Arturo Alessandri, nos da una pista, quizás no deliberadamente, acerca de cómo operaron los fundadores de las primeras plantas industriales en el siglo XIX, buscando el patrocinio del Estado. Al hacer la genealogía del político, cuenta que su abuelo, un inmigrante toscano que había llegado a Chile en 1821, pasó de ser titiritero a comerciante y cónsul honorario de Cerdeña. En este último, en 1856 recomendaba a otro italiano al presidente Manuel Montt, en los siguientes términos: “... hice presente a don Juan Ziccardi que designe los fondos que solicita al Gobierno, como auxilio para complementar los que su establecimiento exige (se trataba de una fábrica de loza). Como Ud. lo sabe, mis deseos en este asunto no tienen más miras que el adelanto de Chile en la industria fabril...” (Cf. *Alessandri, agitador y demoleador*. México, Fondo de Cultura Económica, 1952, pp. 24-25). Resulta casi innecesario aclarar que el compatriota de Alessandri recibió el subsidio solicitado.

en el plano del régimen político, la posición predominante que la oligarquía mantuvo, sobre todo en el parlamento, y secundariamente en algunos organismos no electivos como el Consejo de Estado y la Corte Suprema, le permitieron bloquear invariablemente los intentos de otros actores sociales y políticos de avanzar en la democratización de la política chilena.

La oligarquía terrateniente no perdió la capacidad para ocupar las cimas del poder a pesar de que Chile, obviamente, experimentó cambios significativos entre 1860 y 1960. Lo logró porque fue reajustando los mecanismos a través de los cuales se articulaba su poder político en las sucesivas transiciones que se sucedieron en el siglo XX. Vale la pena subrayar cuándo se produjeron esas transiciones: en 1920, es decir, en la primera elección presidencial en la cual hubo una apelación al público en general; en 1925, cuando se retornó al sistema presidencial; en 1938, cuando se produjo la primera elección con participación efectiva de los partidos de izquierda; en 1949, cuando se concedió el voto a las mujeres en el plano nacional y en 1958, es decir, cuando se realizó la primera elección con ampliación efectiva del sufragio. El precio que pagó la sociedad chilena por este fenómeno de supervivencia del dominio oligárquico fue múltiple: el congelamiento (o imposición) de la dominación oligárquica en los ámbitos rurales del Valle Central y de las regiones más al sur, que se agregaron al territorio nacional en el último tercio del siglo XIX, la supervivencia de visiones clasistas, reforzadas por la adhesión a los valores aristocráticos de segmentos significativos de las clases medias y populares, y el estancamiento crónico de la economía chilena durante los primeros tres cuartos del siglo XX, estancamiento al que no fue ajena la adopción por parte de otros sectores propietarios, de las conductas rentísticas perfeccionadas por la oligarquía.

La relación de la oligarquía con el poder fue ambivalente. Se reveló como una clase singularmente potente para disciplinar a las clases subalternas, se trató de campesinos e indígenas y más tarde de obreros. Y, al mismo tiempo, fue una clase a la que le resultó especialmente difícil gobernarse a sí misma; en este segundo plano, fue sistemáticamente indisciplinada. Una de las manifestaciones políticas de esta dualidad —la fortaleza para someter a subalternos y adversarios y la debilidad para sujetarse a sí misma a reglas— fue la permanente conflictividad que caracterizó a la relación entre el presidente y el parlamento hasta 1973. Este fenómeno adquirió nuevas connotaciones a partir del triunfo en 1920, del primer presidente sin abolengo aristocrático, Arturo Alessandri, pero también caracterizó a las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo bajo varios de sus predecesores oligárquicos. En numerosas ocasiones, diferentes presidentes y sus ministros protagonizaron intentos de autonomizar el Estado y, prácticamente sin excepciones, dichos intentos fueron resistidos o sabotados desde el parlamento, donde predominaban los grandes

terratenedientes o sus asociados directos.²¹ El ejemplo más destacado de este fenómeno fue, sin duda, la guerra civil y el triunfo de las fuerzas parlamentarias que llevó a la deposición y posterior suicidio del presidente Balmaceda.²²

De todos modos, los conflictos entre el presidente y el congreso aludían a una paradoja más profunda. La temprana consolidación del orden republicano en la década de 1830 se apoyó en la formación de un Estado centralizado y despótico, que integró eficazmente a Chile a la expansiva economía mundial de mediados del siglo XIX, sobre la base de la exportación de trigo, cobre y, en menor medida, plata. A pesar de que los grandes terratenientes del Valle Central reconocían que la credibilidad del Estado de una sociedad pequeña y alejada de un mundo, con eje en el Atlántico, dependía centralmente de la estabilidad del valor de su moneda, las elites chilenas fracasaron en sus intentos de alcanzarla, especialmente a partir de la sanción de la Ley de bancos, que inspiró Courcelle-Seneuil en 1860. No debe sorprendernos entonces que, más de un siglo después de la aprobación de esa medida, Hirschman identificara todavía a Chile como el *locus classicus* de la inflación en América Latina.²³ En el siglo XIX, la raíz de la incorregible inflación fue la nunca resuelta controversia entre “oreros” y “papeleros”, es decir, entre los partidarios de la adopción del patrón oro y los defensores de la emisión de papel moneda. Como analiza el propio Hirschman, el fracaso en el control de la inflación no fue causado por los vicios de cada una de las dos posturas, sino porque ninguna de ellas fue adoptada consistentemente; tipificando de tal modo, un clásico ejemplo de una no-decisión.²⁴ El statu quo, claro está, no fue alterado y el poder de los terratenientes resultó reforzado, a pesar de

21 En 1918, según Arnold Bauer, 67% de los senadores y 40% de los diputados eran propietarios de grandes haciendas. (Cf. *La sociedad rural chilena*, p. 246).

22 El *casus belli*, en 1891, fue el tema de la sucesión presidencial. Balmaceda pretendió imponer el nombre de su sucesor y la mayoría del parlamento se opuso. Con ribetes no tan dramáticos, similares confrontaciones se repitieron con otros presidentes de la etapa oligárquica. Una manifestación contundente de lo que estaba en juego en la guerra civil fue la profundidad de los reemplazos de funcionarios públicos, que dispusieron las nuevas autoridades una vez removido Balmaceda. En septiembre de 1891, la junta que se hizo cargo del gobierno, disolvió el alto mando del ejército y destituyó a todos los jueces, profesores universitarios, secundarios y primarios, y los empleados del Registro Civil, nombrados por Balmaceda. Cf. Brian Loveman y Elizabeth Lira. *Las suaves cenizas del olvido*. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 1999, p. 7. Esa “escoba” que pasaron los ganadores de la guerra civil de 1891 también tuvo que ver con un pedestre, pero relevante, enfrentamiento entre los “in” y “out” que Timothy Scully capta muy agudamente en *Rethinking the Center. Party Politics in Nineteenth- and Twentieth-Century Chile*. Stanford, Stanford University Press, 1992.

23 Hirschman, *op. cit.*, p. 217.

24 Es por ello que el notable economista alemán advirtió acerca de los riesgos de concluir mecánicamente que la inflación era promovida de manera deliberada por la oligarquía terrateniente. En realidad, operaban objetivos contradictorios que predominaban alternativamente: por un lado, mantener la respetabilidad nacional en los círculos financieros internacionales con centro en la *city* londinense; por el otro, no secar una de las fuentes de los beneficios, que le redituaban a los terratenientes el acceso privilegiado a los recursos públicos. *Ibidem*, pp. 226-235.

que, como ya señalé, los soportes productivos de su predominio se resquebrajaron a partir de la década de 1870.

La oligarquía terrateniente dejó, entonces, un pesado legado de “inconducta” monetaria que, en el siguiente siglo, otros actores se encargarían de atesorar y de tornar aún más enredado. Empero, no fue ese el único legado que sería acrisolado por las clases empresariales del siglo XX. Hubo otro más pesado aún: la rigidez de las barreras de clase. Los grandes empresarios industriales, comerciales y de servicios devinieron herederos de una concepción aristocratizante de la vida, arraigada en las visiones de los dueños de fundos. Esta concepción del mundo trascendió al campo y se difundió por la sociedad chilena toda, incluidos los planos de la política. María Rosa Stabili en su investigación sobre la “mentalidad de la elite chilena”, quizás inspirándose en su compatriota Gramsci, acota atinadamente que la eficacia de las visiones jerárquicas y paternalistas de la oligarquía se reflejó, en cierta medida, en la circunstancia de que ellas fueron adoptadas mayoritariamente por otros sectores sociales, incluso por las clases populares.²⁵ Por supuesto, que la hegemonía oligárquica no excluyó la vigencia de mecanismos menos sutiles de ejercicio de la dominación, toda vez que los campesinos, los peones rurales, y, por supuesto, los mineros, osaron rebelarse.

Durante los primeros dos tercios del siglo XX, el *ethos* oligárquico proveyó el cemento ideológico que alimentó la enconada resistencia de las clases patronales ante la integración en la esfera de la ciudadanía de los campesinos, los trabajadores manuales y, más tarde, los pobladores urbanos, es decir, los habitantes de las “callampas” o barrios urbanos más empobrecidos. Por ello, la formación de una clase de empresarios industriales a partir del período de entreguerras no modificó de manera significativa las orientaciones y comportamientos de los patrones chilenos. Como examino en mi tesis doctoral, en la cual analizo las políticas de promoción industrial y la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), en 1939, los industriales estuvieron lejos de aproximarse al perfil modernizante que presumiblemente debían poseer las burguesías industriales, según las imaginaban actores tan diversos como los comunistas criollos, los economistas de la CEPAL y, más adelante, los teóricos de la modernización y los políticos y técnicos desarrollistas.²⁶ Los industriales fueron tan antiobreros como los terratenientes, y al igual que es-

25 La historiadora italiana apuntó que “...la ruralidad, real o aparente, ha constituido el modelo de identidad y de la convivencia nacional, el universo de los valores que ha mantenido unidos e interpretado a los chilenos: no solo a los miembros del sector alto, sino también y quizás más aún a los sectores populares”. Cf. *El sentimiento aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960)*. Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 2003, p. 263.

26 Cf. Marcelo Cavarozzi. *The Government and the Industrial Bourgeoisie in Chile. 1938-1964*. Tesis doctoral. Berkeley, Universidad de California, 1975.

tos últimos, manifestaron una oposición irreductible a cualquier intervención del Estado en los lugares de trabajo, especialmente en las plantas fabriles de su propiedad. Y de manera tan sistemática y contradictoria, como los dueños de fundos, proclamaron las bondades del *laissez faire*, a la par que procuraron asegurarse de que el flujo de rentas extraordinarias que el mismo Estado les proporcionaba no se interrumpiese, logrando que las instituciones públicas represivas impidieran que se desplegara la lógica competitiva del conflicto distributivo entre capital y trabajo, lógica que implica el reconocimiento a los trabajadores de los derechos de organizarse y peticionar libremente.

El quiebre de entreguerras: expansión del Estado y de la productividad política

Chile fue, como Cuba y en cierta medida Brasil, uno de los países que experimentó más tempranamente el derrumbe del capitalismo del *laissez faire* despótico, derrumbe que sobrevino como resultado de la Primera Guerra.²⁷ A las causas más generales, asociadas al ocaso del predominio británico y el formato de economía mundial con que dicho predominio estaba asociado, en Chile se sumó, como es bien sabido, la declinación irreversible del salitre que, desde fines del siglo anterior había sido el principal componente de la canasta de exportaciones chilena y la fuente de la mayoría de los ingresos fiscales.²⁸ Sin embargo, la debacle del salitre, a la cual se agregó temporariamente, en la década de 1930, la caída de los precios de las otras exportaciones, no constituyó solamente el fin de la economía de exportación, o del crecimiento hacia afuera, que había predominado hasta 1914. Fue, más globalmente, el fin de un tipo de país. El turbulento primer lustro de la década de 1920 marcó el ocaso final del país que Portales y la oligarquía, predominante luego de la independencia, habían inventado. Ese Chile ochocentista había experimentado su último espasmo expansivo con el exterminio de las postreras resistencias de los mapuches en la Araucanía y la ocupación de sus tierras y la conquista de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Tacna, en manos de bolivianos y peruanos. No fue accidental, entonces, que en el cuarto de siglo que siguió al fin de la Guerra del Pacífico se multiplicaran imágenes como la del político Radical, Enrique Mc Iver, cuando se lamentaba porque los chilenos “no (eran) felices” o radiografías como las de Francisco Encina, quien publicó uno de sus textos bajo

27 Wanderley Guilherme dos Santos califica así a la etapa que transcurrió entre mediados del siglo XIX y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Cf. *Razões da Desordem*. Rio de Janeiro, Rocco, 1993.

28 La contribución del salitre, según Patricio Meller osciló entre un tercio y la mitad de la recaudación tributaria total. Cf. *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*. Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello, 1996, p. 25.

el título de *Nuestra inferioridad económica*.²⁹ Ese sentimiento de desilusión, sin embargo, se acentuó a partir de 1914. Las fuertes sacudidas que produjo la guerra europea trajeron a la superficie todos los problemas de la sociedad chilena de la *belle époque*. En ese contexto, no resultó extraño, entonces, que las elecciones presidenciales de 1920 abrieran una grieta en el sólido edificio oligárquico, por el cual se filtró un político que había jugado con las reglas del régimen durante muchos años, pero que triunfó en las elecciones gracias a que transgredió algunas de las normas, en particular aquellas que establecían que la contienda era solo un juego de caballeros, por supuesto tramposo, pero que no incluía al “pueblo”. Arturo Alessandri, de quien se trataba, por primera vez en la historia electoral de su país hizo campaña, es decir, pidió el voto de los chilenos. Por cierto, a pesar de ello la elección finalmente se jugó de acuerdo con las más estrictas reglas aristocráticas: la decisión de a quién correspondían un puñado de electores en cuestión la tomó un “Tribunal de Honor” de siete miembros. A pesar de que supuestamente su opositor, Luis Barros Borgoño, contaba con la mayoría, finalmente el tribunal le adjudicó el triunfo a Alessandri, al decidir que le correspondían 179 electores frente a los 174 de su adversario.³⁰

La presidencia de Alessandri y el fracaso del proyecto minimalista

La grieta abierta en 1920 no se cerró, sino que se tornó en una fisura irreparable. Es que el problema, como ya adelanté, iba mucho más allá de la escasa legitimidad del régimen político.

En primer lugar, el quiebre trajo a la superficie la fragilidad del modelo de desarrollo hacia afuera de un país dependiente, cuyo aislamiento del eje del Atlántico Norte se había acentuado aún más después de la apertura del canal de Panamá, en 1912. Para colmo, Chile no solo estaba atado a la suerte de una única mercancía, sino que el atractivo de dicha mercancía en el mercado mundial, como en el caso del guano peruano, resultó relativamente breve. Como fue señalado por muchos, la difusión de técnicas más eficientes para la elaboración de nitrato sintético por parte de los alemanes durante la primera guerra y el continuado abaratamiento de su producción durante la década siguiente aceleraron

29 Francisco Encina. *Nuestra inferioridad económica*. Santiago de Chile, 1911. Encina, junto con otros ensayistas como Tancredo Pinochet y Eduardo de la Barra, identificaron al escaso desarrollo de la educación pública como la principal causa de la falta de identidad de “raza chilena” y la concomitante ausencia de compromiso del pueblo con el progreso nacional.

30 Manuel Rivas Vicuña, que condujo las negociaciones, resumió las complejas gestiones que llevaron a la formación del Tribunal de Honor, de las cuales el paso final fue la sugerencia de los dos últimos miembros que lo integraron por parte de Alessandri –de una nómina de seis nombres que él propuso y la aceptación por parte de su adversario. (Cf. *Historia Política y Parlamentaria de Chile*. Tomo II. Santiago de Chile, Ediciones de la Biblioteca Nacional, 1964). Cabe anotar que otros autores arguyen que la diferencia de electores entre Alessandri y su adversario fue solamente de uno.

la debacle del salitre. El reemplazo del salitre por el cobre, que se convirtió nuevamente en la principal exportación chilena durante 1929, tampoco revertiría la posición dependiente del país, aunque ciertamente modificó sus rasgos.

En segundo lugar, el derrumbe hizo crujir los pilares internos de la sociedad oligárquica en la década de 1920. Cuando terminó la guerra mundial, en 1918, el Estado chileno pareció quedarse "... sin cartas que jugar". A diferencia del presidente Santa María, quien poco antes de desencadenar la guerra contra Bolivia y Perú le confesaba a su lugarteniente, Antonio Varas, que "... vamos a jugar a una carta toda nuestra bolsa", el político que ocupó la presidencia en 1920 pareció no disponer de una carta semejante.³¹ Eso a pesar de que Alessandri había llegado a la primera magistratura atreviéndose a trasponer, si bien prudentemente, el marco de los cenáculos de la oligarquía y, por añadidura, había prometido sacar al país del pozo en que se encontraba.

Y, en tercer y último lugar, la posguerra inauguró un período de extraordinaria productividad en la política chilena, aunque también le agregó una considerable dosis de confusión, fenómeno que tornó imposible una vuelta atrás. Algunos de los rasgos del período 1920-1932 fueron analizados detalladamente por varios autores; más abajo me detengo en esos rasgos, en especial, en los nuevos, e intensificados, patrones de intervención de los militares y en el sesgo anti-partido que, concomitantemente, adquirió la política.³² Sin embargo, pocos han reparado en una de las novedades, a mi juicio más importantes: la centralidad que cobró el personalismo en la política, fenómeno estrechamente asociado a Arturo Alessandri y a quien en 1920 era todavía un oscuro mayor del ejército, pero que solo cinco años después se convertiría en una poderosa figura: Carlos Ibáñez del Campo. Alessandri e Ibáñez eran, cada uno de ellos, dos personajes absolutamente contradictorios y capaces de las volteretas más inverosímiles en sus conductas políticas. El protagonismo que tuvieron en la década de 1920 le agregó una elevada dosis de confusión a una política ya de por sí complicada. Por cierto que la carrera política de ambos no se agotó con la década; Alessandri e Ibáñez dominaron la escena política durante los cuarenta años que se sucedieron después del fin de la primera guerra, como examino más adelante; de hecho entre los dos ejercieron la presidencia de la nación durante más de la mitad de esos años. Aquí, más

31 Cf. Carmen Mc Evoy. *Guerreros Civilizadores. Política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico*. En su prodigioso análisis de la construcción de un ideario de guerra, y de un Estado que lo implementó bajo un liderazgo extremadamente concentrado en el presidente Santa María, su sucesor Aníbal Pinto y Antonio Varas; este último ejerció una especie de "presidencia en el teatro de operaciones" durante la guerra. Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 2011.

32 Ver por ejemplo, Brian Loveman y Elizabeth Lira en *Las suaves cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación Política 1914-1932*. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 1999; Frederick Nunn en *Chilean Politics 1920-1931. The Honorable Mission of the Armed Forces*. Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos, The University of New Mexico Press, 1970 y Gonzalo Vial en *op.cit.*

bien, quiero subrayar dos atributos, que tanto el político como el militar poseían y que no fueron ajenos a sus éxitos. El primero es que, a pesar de que se trataba de individuos con antecedentes y estilos completamente diferentes, los dos compartían la capacidad para “interpelar a la gente común... alejada de la política”, es decir, tenían una gran habilidad para encontrar oídos receptivos, más allá de los espacios específicos en los que cada uno se movía preferentemente, es decir, los salones partidarios y los cenáculos parlamentarios el uno, y los cuarteles el otro.³³ Esta cualidad resultó decisiva en la década de 1920, es decir, una etapa en la cual la rutina de los debates parlamentarios y los desprestigiados rituales electorales generaban resentimiento y distancia. El segundo atributo fue el eclecticismo, que algunos calificaron como oportunismo y confusión, que caracterizó a los planteos y acciones de Alessandri e Ibáñez. Expresaban posturas anti-oligárquicas, pero pactaban con los oligarcas; se declaraban nacionalistas, pero cultivaron a menudo el apoyo de Estados Unidos; se proclamaron fervorosamente democráticos, pero no vacilaron en promover acciones de los militares en contra de las reglas institucionales, cuando estas obstaculizaban sus propósitos; podían declararse amigos de la iglesia católica y al día siguiente conspirar dentro de una logia masónica. Pero, claro, según el momento, y la fortuna que les acompañaba en cada iniciativa que tomaban, el oportunismo fue visto como plasticidad, es decir, como la capacidad para conciliar opuestos, para promover acuerdos entre enemigos y para maniobrar en aguas turbulentas. Debe advertirse, por ende, que el protagonismo que ganaron Ibáñez y Alessandri —más allá de que ambos concluyeran sus primeros períodos presidenciales viéndose forzados a renunciar— tuvo mucho que ver con la circunstancia de que ambos encarnaron y expresaron, cada uno a su manera, la creatividad y la confusión que reinaron en un período de crisis como el de 1920-1932.³⁴

El desempeño de Alessandri, una vez asumida la presidencia, no pudo ser más decepcionante. Prácticamente todas las iniciativas que tomó se frustraron entre cambios de gabinete y continuos virajes en el contenido de las políticas.

33 La imagen la utiliza Joaquín Fernández para referirse al militar en su *El Ibañismo. Un caso de populismo en la política chilena. 1937-1952*. Santiago de Chile, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica, 2008.

34 Alessandri llegó en 1920 a la presidencia, dejando atrás un pasado lleno de vuelcos y peripecias, que llevó a que uno de sus biógrafos más críticos le atribuyera una “insinceridad y aventurerismo meridionales”. Ricardo Donoso, de él se trata, fue el autor de una de las biografías más completas del político; sin embargo los dos tomos de *Alessandri, agitador y demoleedor. Cincuenta años de historia política de Chile*, (México, Fondo de Cultura Económica, 1952), aunque documentan minuciosamente cada episodio de su vida, están teñidos por un sesgo anti-alessandrista que los lleva a frecuentes exageraciones y errores. Resulta sugestivo que Donoso utilice permanentemente, y de manera crítica, el calificativo de “meridional” para describir a Alessandri. Probablemente era propenso a concluir que la cercanía al Mediterráneo le restaba seriedad a cualquier persona y no tenía en cuenta que el abuelo de Alessandri provenía en realidad de una región ciertamente no meridional, por lo menos de Italia, en la cual la política, precisamente, había sido elevada a la categoría de arte; el ducado de Toscana.

El contraste entre las promesas alessandristas de superar el *impasse*, por un lado, y la intensificación de los tironeos entre el presidente y el parlamento, controlado por la oligarquía, sin que se produjeran cambios significativos, por el otro, fue el detonante de un nuevo fenómeno; una *malaise* que se extendió por toda la sociedad chilena. En este clima no resultó extraño que se identificara a los políticos como el principal obstáculo que impedía la resolución de la severa crisis que afectaba al país.³⁵ Alessandri y sus adversarios aparecieron enredados en una lucha facciosa que tuvo como único resultado, según críticos que encontraron oídos receptivos, el agravar la crisis. La condena a la política fue generalizada y abarcó diversos planos, incluido el mecanismo en el cual se fundaba, supuestamente, la legitimidad de los políticos: la voluntad ciudadana expresada a través del voto. Poco repararon los críticos en que en 1920, en realidad, votase solo el 2 o 3% de los chilenos y que el cohecho era una práctica generalizada, sobre todo en los ámbitos rurales.

La condena sin excepciones de la política, por esa razón, escondía una profunda ambigüedad. Por una parte, la crítica a los mecanismos electorales no era ajena a las ostensibles manipulaciones que hacían de ellos numerosos políticos, especialmente los que provenían de comunas rurales. Estas prácticas, se sostenía con razón, producían la distorsión de la voluntad de los ciudadanos. Por lo tanto, la crítica a las elecciones implicaba denunciar el fraude y la falta de transparencia. Pero, como contrapartida, otros actores atacaban el sufragio porque temían al potencial movilizador del voto, en la medida en que las restricciones severas a su expansión estaban provocando la reacción de algunos segmentos de los sectores excluidos. En ese sentido, el ataque al voto tenía mucho que ver con el temor a que “las clases peligrosas” adquirieran poder, aunque fuera en cuotas mínimas.

Los prolegómenos y los resultados de las elecciones parlamentarias de 1924 ya hacían presagiar que el choque entre Alessandri y sus opositores, que controlaban la mayoría del Senado, podían reeditar la situación planteada en 1891, amenazando la continuidad institucional. Muchos de los integrantes de la Alianza Liberal, es decir, el conglomerado que había apoyado al presidente en 1920, proclamaba que era necesario inspirarse en las soluciones adoptadas en Italia y España, refiriéndose a los golpes de mano autoritarios de Mussolini y de Primo de Rivera, mientras que sus adversarios de la Unión Nacional opositora instaban a derribar a “la dictadura”. El desenlace electoral no hizo más que precipitar las cosas. El rotundo triunfo de la Alianza mostró que la astucia y los recursos de Alessandri eran supe-

35 La ineficacia de los políticos se tradujo, entre otras consecuencias, en el fracaso en generar nuevas fuentes de ingresos en una situación de crisis fiscal. Un ejemplo de esta ineficacia se dio cuando Alessandri presentó un proyecto para la creación de un impuesto a los réditos que fue bloqueado por el congreso sin proponer alternativas.

riores a los de sus adversarios; el fraude fue armado más eficazmente por las autoridades designadas por el presidente, especialmente los intendentes, que por las Juntas Inscriptoras volcadas por lo general a la oposición, e hizo casi inevitable la ruptura.³⁶ En los meses siguientes, tanto los parlamentarios opositores como el presidente se dedicaron de manera descarada a conspirar con los militares.³⁷ Encontraron audiencias receptivas: los mandos medios, especialmente, estaban disconformes con la postergación de ascensos y el nivel de sus sueldos. Según algunos analistas, los oficiales estaban también en desacuerdo con la circunstancia de que los gobiernos los forzaran a controlar elecciones y a reprimir huelgas obreras.³⁸ La balanza pareció inclinarse a favor de la oposición los primeros días de septiembre de 1924, cuando al verse forzado a nombrar a un general como ministro de Interior, Alessandri renunció y se refugió en la embajada de Estados Unidos. Inmediatamente después, los militares disolvieron el congreso.

Durante un par de meses, los altos mandos del ejército y la marina, que componían la Junta que se hizo cargo del gobierno, parecieron controlar la situación. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que estaban muy cerca de los oligarcas de la Unión Nacional, para el gusto de quienes reclamaban la “regeneración” nacional, entre los que se contaban la mayoría de sus subordinados en el Ejército. Finalmente, en enero de 1925, los golpistas fueron depuestos por otra junta que había continuado funcionando desde el estallido del *putsch*, una Junta Militar y Naval formada mayoritariamente por oficiales de rango intermedio, en la cual el protagonismo central lo tuvieron dos o tres oficiales, y de manera destacada Carlos Ibáñez. El entonces teniente coronel, asumió como ministro de Guerra y comenzó a manejar los hilos del gobierno, convocando a Alessandri para que reasumiera la presidencia. El político retornó y logró la sanción de una nueva constitución, que fue redactada por una Comisión “chica”, escogida a dedo en la nómina extensa de una Comisión Consultiva, designada por decreto y aprobada en un plebiscito en el que votaron 134.000 personas de un total de 302.000. En realidad, la redacción de la constitución fue manejada personalmente por el propio Alessandri, omitiendo

36 Un informe elaborado por un ex diputado conservador, Cox Méndez, demostraba claramente que la vieja disputa entre el ejecutivo y los organismos locales, controlados por los parlamentarios, no se había disipado en modo alguno en la década de 1920. El informe es citado por Donoso, *op.cit.*, p. 353.

37 Cf. Frederick Nunn. *Chilean Politics, 1920-1931. The Honorable Mission of the Armed Forces*, pp. 47-48.

38 La supuesta renuencia a reprimir las demandas obreras quedó desmentida, sin embargo, por la prontitud y letal contundencia con que el ejército lidió con el descontento de los trabajadores de una oficina (yacimiento) salitrera, la Coruña. A principios de junio de 1925, con Alessandri repuesto en la presidencia e Ibáñez como ministro de Guerra, las tropas ametrallaron a mansalva a obreros que habían declarado una huelga general. Según observadores británicos, probablemente más cercanos a la verdad que los periódicos obreros que aludieron a millares de cadáveres, por una parte, y el informe oficial que contabilizó 59 bajas, por la otra, los muertos oscilaron entre 600 y 800.

la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como la mayoría de la clase política suponía que ocurriría.

La norma de 1925 restituyó la mayoría de las atribuciones presidenciales que habían sido eliminadas en 1891, pero de todos modos no eliminó el riesgo de conflicto de poderes; por el contrario, más bien lo agudizó. Esto ocurrió porque se pasó de una situación en la cual el presidente estaba a merced del congreso, a otra en la que se aumentó el riesgo de empates catastróficos entre los dos poderes, debido a un par de cláusulas de la nueva constitución. La primera de dichas cláusulas le otorgó al congreso pleno, la facultad de designar al presidente entre los dos candidatos más votados, cuando ninguno hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos en las elecciones presidenciales. Esta situación se iba a presentar a menudo a partir de la década siguiente, ya que en la mayoría de las elecciones ningún candidato llegaría a la mitad de los votos. La consecuencia fue que el congreso adquirió una capacidad de chantaje en relación con el candidato más votado, ya que podía utilizar el recurso de amenazarlo con elegir al segundo. Pero la cláusula más importante fue la legislada por los artículos 39 y 42 de la constitución, que dispusieron que el congreso tenía la facultad de destituir al presidente si este “comprometiera gravemente el honor o la seguridad del Estado o infringiera abiertamente la Constitución o las leyes”. La constitución, a través de los artículos 39 y 42, estableció que los diputados, como cámara acusadora, debían aprobar por simple mayoría la imputación, mientras que el senado, como cámara enjuiciadora, podía destituir al titular del poder ejecutivo, siempre que dos tercios de los senadores lo declararan culpable. Era evidente que la determinación de que constituía un compromiso grave al honor nacional o una infracción abierta de la constitución era, por supuesto, materia de interpretación, con lo que se dejaba en manos del congreso una atribución que se transformó en un arma de efectos potencialmente letales para el presidente, dado que la configuración multipartidaria chilena tornaba prácticamente imposible que él tuviera una mayoría propia.

La constitución fue sancionada en un contexto extraordinariamente turbulento; a las numerosas pujas políticas se sumó el hecho de que durante esa coyuntura estaba funcionando la misión Kemmerer, que elaboró sus recomendaciones –las más importantes fueron la creación del Banco Central y el retorno al patrón oro– con el apoyo de prácticamente toda la clase política, como así también de los militares. Pero pronto Alessandri pudo constatar que no iba a ser él quien ejerciera las reforzadas atribuciones presidenciales. Ibáñez hizo movidas cada vez más audaces, dejando en claro quién era el que detentaba el poder; como consecuencia, Alessandri renunció por segunda vez, pocos días después de promulgada la constitución. Esta nueva renuncia inauguró una enemistad política que se mantendría hasta la muerte de Alessandri en 1950, cuando para su horror, Ibáñez se perfilaba como un

fuerte contendiente de la cercana elección presidencial en la que, efectivamente, fue electo. Pero además, constituyó la demostración que cuán equivocados estaban Alessandri y los otros políticos acerca de los militares, tanto los que lo apoyaban como quienes se le oponían. Ninguno, excepto algunos personajes muy secundarios, previó que a partir de 1924 y por unos cuantos años, los militares dejarían de jugar las cartas de los políticos y se transformarían ellos en los nuevos *dealers* del mazo.

La dictadura de Ibáñez y el primer paso en la construcción del Estado dirigista

Si bien Ibáñez controló el gobierno desde principios de 1925, al desplazar a la cúpula de generales y almirantes de la Junta de Gobierno, formada pocos meses antes, y convertirse en ministro de Guerra, su principal preocupación durante los dos años siguientes fue la de conseguir ejercer plenamente el poder, sin tener que lidiar con las mediaciones de los dos presidentes constitucionales que sucedieron a Alessandri, a quienes, de todos modos, manipuló casi a placer. Esta dilación, en primer lugar, se vinculó con las complejas maniobras que debió desplegar en sus relaciones con los políticos tradicionales, insertándose en el barroco juego de la clase política oligárquica, que le era prácticamente desconocido. Una vez borrado de la escena Arturo Alessandri, Ibáñez tuvo que lidiar con la nutrida lista de apellidos patricios que poblaban la escena partidaria. Sin duda, un buen ejemplo de esta lista lo dieron los nombres de las dos figuras de prosapia ilustre que ejercieron la presidencia entre 1925 y 1927, Barros Borgoño y Figueroa Larraín, a quienes Ibáñez finalmente también forzó a renunciar, recurriendo a buenas y malas artes, entre ellas la interminable sucesión de humillaciones a las que los sometió.

En segundo lugar, empero, Ibáñez, desde el comienzo de su irrupción en la política, se enfrentó con otro problema de resolución aún más complicada; los comportamientos de sus propios colegas de la oficialidad militar. ¿Cómo podría Ibáñez, o cualquier otro militar que, como él, se decidiera a apostar fuerte en la política nacional, calibrar cómo reaccionarían sus colegas ante las iniciativas que él tomaba?³⁹ ¿Cómo medir los cálculos que otros oficiales harían, y cuáles serían sus posicionamientos frente a los conflictos que permanentemente se planteaban en la situación de crisis? Preguntas difíciles de contestar en una arena como la militar, en la cual por definición la deliberación, o cualquier otra acción que vaya en contra de la estructura jerárquica, es

39 Un ejemplo de otro oficial que quiso jugar como Ibáñez fue Marmaduke Grove, quien era contemporáneo de Ibáñez y estuvo muy cercano a él en las etapas iniciales del proceso de involucración de las fuerzas armadas en la política. La vida política de Grove, empero, a partir de 1926 no fue más que una extensa lista de reveses, atribuida por muchos analistas de la época a su presunta ingenuidad. El primero se lo infligió el propio Ibáñez cuando, sospechando que le podía hacer sombra, lo envió en comisión a Europa, destituyéndolo de su cargo de Director General de Aeronáutica.

considerada como una falta a la disciplina y como un quebrantamiento de la debida subordinación a los mandos superiores.

Hasta que fue electo formalmente en la presidencia en 1927 –en unas elecciones en las que su supuesto, y único, oponente, el Comunista Elías Laferte, estaba confinado en la Isla de Pascua–, Ibáñez manejó hábilmente la situación, combinando su capacidad para la intriga con la utilización de amenazas. Ya unos meses antes, al convertirse en ministro de Interior, había producido el viraje más importante de su gestión. Designó ministro de Hacienda a Pablo Ramírez, un abogado con veleidades ingenieriles que proclamaba su aversión a la política partidaria, quizás porque provenía de las entrañas de la misma. Desde muy joven, Ramírez se había destacado en el partido Radical y fue él quien, junto a un grupo de ingenieros, algunos de ellos con experiencia en los ferrocarriles del Estado y otros organismos públicos y otros que venían de la actividad privada, plantó las semillas para la formación de una élite de “ingenieros del Estado”, que con una filosofía meritocrática y decididamente estatista se constituirían en uno de los pilares de la regeneración moral cuya bandera asumió Ibáñez.⁴⁰ Las propuestas de Ramírez apuntaron firmemente a convertir al Estado en el eje de la recuperación económica. Las medidas no fueron radicales en su contenido, entre otras razones, porque varias de ellas se montaron sobre las recomendaciones de la muy ortodoxa Misión Kemmerer –las ya mencionadas decisiones de creación del Banco Central y la vuelta al patrón oro figuraron entre las más relevantes– y buscaron pragmáticamente evitar el naufragio definitivo de la explotación del salitre.⁴¹ Pero el marco de las medidas sí fue revulsivo, pues el plan del “gabinete de febrero”, que Gonzalo Vial comenta, se autocalificó como el “gabinete de jóvenes orates”, se lanzó en un contexto en el que se abrió una brecha para que el ejecutivo dispusiera de una excepcional libertad de iniciativa.⁴²

El plan de febrero tuvo un adecuado acompañamiento político; se ejecutó en sincronía con las “patadas de caballo”, que Ibáñez pegó reforzando su

40 El análisis más completo de las ideas y prácticas de Ramírez y sus asociados lo realiza Patricio Silva en *In the Name of Reason. Technocrats and Politics in Chile*. University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 2008.

41 Kemmerer, un economista norteamericano que enseñaba en la universidad de Princeton y había ganado notoriedad en sus misiones a Polonia, México y Colombia, fue contratado por los militares chilenos más conservadores, que ocupaban el gobierno a principios de 1925. La misión elaboró su informe entre julio y octubre de 1925, es decir, en el medio de la vorágine de acontecimientos políticos que incluyeron la sanción de la constitución y la segunda renuncia de Alessandri. Por ello fue que, formalmente, sus recomendaciones, la creación del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos y la adopción del patrón oro, fueron sancionadas en realidad por el mismo Alessandri, a través de tres decretos. Cabe anotar, asimismo, que las facultades extraordinarias de las se aprovechó Ibáñez y que le permitieron entre otras disposiciones, crear la Contraloría General y sancionar el Estatuto Administrativo, que apuntó a la creación de un servicio civil meritocrático, fueron otorgadas por el congreso durante la presidencia de Emiliano Figueroa Larraín.

42 Gonzalo Vial, *op.cit.*, p. 1084.

poder despótico de emergente caudillo.⁴³ Ibáñez, en primer lugar, manipuló a un grupo de oficiales mayores de la marina, que desempeñaban funciones técnicas y no tenían mando de tropa, ya que estas estaban a cargo de los denominados oficiales de guerra, que eran mayoritariamente anti-ibañistas, para desplazar al almirantazgo que había sido claramente antagónico desde 1924. Tradicionalmente, esta fuerza era manejada por oficiales de un linaje más aristocrático que el de sus colegas del ejército, y resultaba bastante obvio y previsible que a los oficiales superiores del arma naval les disgustara que un simple mayor que provenía de una familia sin abolengo terminara encaramándose en la cima del gobierno. Asimismo, se dispuso el confinamiento y exilio de numerosos opositores, periodistas y “agitadores comunistas” y se estableció la censura de prensa. Pero lo más sorprendente fue que las medidas represivas, dispuestas por decreto, alcanzaran también a algunas connotadas personalidades de la elite oligárquica como Gustavo Ross, Eliodoro Yáñez, Manuel Rivas Vicuña –quien hasta pocos días antes había acompañado a Ibáñez en el gabinete–, Agustín Edwards y Rafael Gumucio, entre otros. En cierto sentido, que el garrote presidencial castigara tanto a seguidores de Moscú como a los socios de los capitalistas de Nueva York y Londres, más allá del designio de Ibáñez de apartar a opositores reales o potenciales, estaba en línea con el *Middle Ground* que la filosofía estatista de las medidas aspiraba a transitar. No era este, empero, un fenómeno excepcional. El estatismo de Ramírez y sus asociados no difería demasiado de las posturas asumidas durante los años de entreguerras, por una serie de países periféricos que fueron desde los del Cono Sur americano hasta Turquía y China. Por lo general, los sostenedores del dirigismo de la época se ufanan por encarnar una tercera posición distante del socialismo y del liberalismo, por lo cual no resultaba extraño que consideraran que la lista de sus enemigos incluía tanto a los comunistas como a los partidarios a rajatablas de la libre empresa.

Y, precisamente, el segundo principio cuestionado por el gabinete de febrero fue el de la no intervención del Estado en la economía. El diagnóstico de Ramírez y sus asociados más próximos, entre quienes se destacaron Guillermo del Pedregal, Desiderio García y Raúl Simón, fue que era necesario reactivar la economía haciendo eje en el Estado.⁴⁴ El plan, entonces, recurrió a la expansión del gasto público corriente y la construcción de infraestructura –financiados por el aumento de los impuestos y los empréstitos externos, fundamentalmente de origen norteamericano– la creación y perfeccionamiento

43 Lo de “caballo” se le había adosado como apodo a Ibáñez, presuntamente, porque era capaz de dar sorpresas “patadas”. Se apoyaba en el hecho innegable de que los equinos dan coces difíciles de eludir.

44 Los tres principales asociados de Pablo Ramírez, a diferencia de su jefe, Guillermo del Pedregal, Desiderio García y Raúl Simón, continuarían por varias décadas protagonizando otros arranques de expansión estatal.

to de los mecanismos de regulación de la economía y de control del sector privado (e incluso del mismo sector público con la creación de la Contraloría General de la República), la racionalización de la administración pública, el reequipamiento y reorganización de las fuerzas armadas (que incluyó la conversión de los Carabineros en un cuerpo de policía militar), la modernización de la producción salitrera, sobre la base de un *partnership* entre el Estado y las grandes oficinas privadas extranjeras, a esa altura básicamente propiedad de los hermanos Guggenheim y, *last but not least*, la sanción de leyes laborales que beneficiaron a empleados de los sectores privado y público.⁴⁵ En este último sentido, vale la pena subrayar que Chile fue uno de los escasísimos países en el mundo en que el sueldo mínimo fue otorgado antes que el salario mínimo, es decir donde los empleados fueron protegidos antes que los trabajadores manuales. Este fue uno de los fenómenos que llevó a varios historiadores, sociólogos y economistas, entre ellos algunos de los más destacados analistas de la sociedad chilena del siglo XX, como Osvaldo Sunkel y Aníbal Pinto, a caracterizar al Estado como “mesocrático”, es decir, como un Estado de clase media.⁴⁶ Otros dos procesos alimentaron esta lectura de los cambios que experimentó Chile en el período de entreguerras; uno fue el origen mayoritariamente no aristocrático del cuerpo de oficiales del ejército, que protagonizó las rebeliones en contra de la elite partidaria en la década de 1920.⁴⁷ Además de no contar entre sus antepasados a terratenientes, los oficiales como Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove tampoco provenían de familias de la gran burguesía financiera y comercial, sino de pobres inmigrantes irlandeses.⁴⁸ La cita de Jack Ray Thomas alude al tercer factor que influyó en la caracterización del Estado, surgido en la década de 1920 como de clase media; el mayor peso adquirido por el partido Radical, que, de modo casi unánime, pasó a ser presentado como el partido de la clase media chilena. En la conclusión examino más detenidamente los argumentos que sustentan esa posición, exponiendo algunas salvedades que considero de peso.

El plan no pudo arrancar más auspiciosamente. Se dejó atrás un par de años de relativo estancamiento y, a partir de 1927, la economía creció vigoroso-

45 Gonzalo Vial resume las medidas del plan Ramírez en su texto, *op.cit.*, pp. 1087-1090.

46 Un libro que se centra específicamente en la transición del estado oligárquico al de “clase media” es el de Enrique Fernández Darraz. Cf. *Estado y Sociedad en Chile: 1891-1931: el Estado Excluyente, la lógica del estado oligárquico y la formación de la sociedad*. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2003.

47 José Nun en su clásico “El golpe militar de clase media” en Claudio Véliz (comp.): *El conformismo en América Latina*. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1970.

48 Al respecto resulta indicativo como el historiador Jack Ray Thomas se refería al padre de Marmaduke Grove: “De su padre, un destacado miembro del partido Radical de Copiapó, él aprendió a identificarse con las aspiraciones de las emergentes clases medias”. Cf. “The Evolution of a Chilean Socialist: Marmaduke Grove”, *The Hispanic American Historical Review* 47:1 (febrero, 1967). El abuelo de Ibáñez, de apellido Evans, había castellanizado su apellido.

samente —el Producto Bruto Interno registró un aumento de casi un tercio en el trienio 1927-1929 y las entradas fiscales superaron ampliamente todos los registros históricos—.⁴⁹ Estas cifras llevaron a que el gasto público alcanzara niveles inéditos y le permitieron a Ramírez y sus *boys* financiar una espectacular expansión de la burocracia pública, ya que los gastos estrictamente administrativos triplicaron en términos reales los niveles del período 1920-1925. Incluso en una especie de nostálgica despedida del mundo que se había derrumbado en la primera guerra mundial, los años de 1927-1929 constituyeron el trienio récord de exportación en la historia del salitre chileno, si bien los ingresos netos fueron considerablemente menores, pues los precios estaban situados a niveles inferiores respecto de la mitad de los registrados una década atrás.⁵⁰ Aunque las encuestas de opinión pública no existían en esa época, la aseveración de Gonzalo Vial en el sentido que la popularidad de Ibáñez, apoyada en la recuperación económica, era inmensa suena verosímil.⁵¹

La coronación de la tarea del dictador llegó en 1929, con dos decisiones políticas que corroboraron su fortaleza. La primera tuvo gran difusión: la invitación a los partidos a elegir el nuevo parlamento, pero sin la participación de la ciudadanía. Los partidos la ridiculizaron como una ocurrencia de un tirano autoritario... pero, claro, solo dos años después, una vez que Ibáñez cayó en desgracia y se vio forzado a renunciar. En cambio, en el cenit de la dictadura, es decir, los meses de fines de 1929 y principios de 1930, los jefes de los partidos desfilaron humildemente por la residencia veraniega del presidente en Chillán, para negociar las respectivas cuotas de sus agrupaciones. Así se conformó el llamado “Congreso Termal” dado que la ciudad era conocida por sus termas. La segunda decisión pasó mucho más desapercibida, pero tuvo consecuencias a largo plazo bastante más serias; fue la creación de la Dirección del Registro Electoral a cargo de un conservador, es decir, un director nombrado por decreto del poder ejecutivo. La designación recayó en Ramón Zañartu, un oscuro funcionario que permanecería en el cargo hasta principios de la década de 1950, precisamente cuando Ibáñez llegó nuevamente a la presidencia y se promovió su renuncia. El director, quizás convencido de que estaba ajustándose puntillosamente a la función que le encargaba velar por el cumplimiento de la Ley de creación del Registro, se distinguió por el celo que puso en negarle

49 Obviamente, las cifras de esos años fueron una despedida definitiva del auge exportador vinculado al salitre, ya a partir de 1930 la producción y las exportaciones de salitre se desplomaron para nunca recuperarse. Alexander Sutulov señala que la producción cayó de casi 3 millones de toneladas en 1928 a 270.000 toneladas en 1932. (Cf. *La minería en Chile*. Santiago de Chile, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, 1976).

50 Cf. Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel. *Un siglo de historia económica de Chile. 1830-1930*. Madrid, Cultura Hispánica, 1982, pp. 124-125.

51 Cf. Vial, *op.cit.*, p. 1091.

la inscripción al partido Comunista durante las décadas siguientes. Vale la pena, al respecto, reproducir el relato de uno de sus discípulos en la Universidad de Chile al presentar su tesis de grado, con un prólogo en el cual agradecía las enseñanzas del mismísimo director del Registro Electoral:

Con motivo de las elecciones generales de Congreso Nacional de 30 de octubre de 1932, los dirigentes del Partido Comunista ocurrieron (sic) ante el Director del Registro Electoral para iniciar los trámites legales a fin de obtener la inscripción de dicha entidad; como don Ramón Zañartu les manifestara su opinión adversa sobre el particular, se abstuvieron de formalizar su petición por escrito. El 12 de enero de 1937 el Partido Comunista solicitaba por escrito su inscripción al Director del Registro Electoral, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Elecciones. (En el acta protocolizada que se acompañaba) se dejaba constancia que el 8 de Enero de 1937 se habían reunido en una sala de la Cámara de Diputados nueve personas, que después de un amplio cambio de ideas, habían acordado constituir una nueva colectividad política con el nombre de "Partido Comunista de Chile", sobre la base de los objetivos, programa y estructura que en la misma Acta se determinaba y se había elegido una Mesa Directiva. Con el mérito de estos antecedentes, el Director del Registro Electoral por oficio N° 49 de 15 de enero 1937, negó al Partido Comunista su inscripción en el Registro Electoral, fundando su resolución (entre otras) en la siguiente consideración: En que la doctrina o sistema político, social y económico sustentado por el Comunismo atenta contra el régimen legal y constitucional de la República y coloca, de hecho, a este Partido al margen de la ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 292 del Código Penal, que dice: "Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito por el solo hecho de organizarse".⁵²

Más allá de reconocer el espíritu cívico que demostraron en 1932 los dirigentes comunistas, absteniéndose de atiborrar a una repartición pública con papeles manifiestamente inservibles —como quedaría corroborado cinco años más tarde—, debe repararse en que el efecto de las disposiciones de Zañartu, obviamente apañadas desde el máximo escalón del poder ejecutivo, fueron el primer hito en una larga serie de exclusiones y proscripciones que implicaron que el partido Comunista recién iba a poder presentar candidatos que pudieran utilizar libremente el nombre de la agrupación en las elecciones parlamentarias de 1961, salvo una elección local intermedia. Como resulta evidente por la crónica efectuada por el aplicado licenciado, a pesar de que ya en 1933 resultaron electos al menos un par de diputados pertenecientes al partido, estos fueron obligados de manera sistemática, a utilizar otra etiqueta partidaria. Así continuó ocurriendo hasta principios de la década de 1960, excepto por el período de vigencia de la Ley de Defensa

52 Cf. José Luis Castro. *El sistema electoral chileno*. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1941.

de la Democracia, durante el cual, claro está, los comunistas ni siquiera pudieron presentarse a elecciones porque la mayoría de ellos estaban presos, confinados o muertos.

En resumen, la dictadura de Ibáñez tuvo una paradójica consecuencia, si se repara en el clima anti-político en el cual había germinado; a pesar de que el militar y sus numerosos aliados no cesaron de calificar a la política chilena como una “gangrena que carcomía el cuerpo social”, el espacio de la política se expandió considerablemente. El espectro de cuestiones sociales y económicas que pasaron a ser materia de debate y de confrontación política no cesó de ampliarse durante el período ibañista. Esta expansión del *en jeu* de la política estuvo estrechamente vinculada a que, en realidad, el Estado chileno no estaba agotado, como parecía en 1920. Por el contrario, el Estado se convirtió en el motor de la transformación económica y en el centro de la política. Especialmente entre 1927 –cuando Ibáñez se hizo cargo formalmente de la presidencia– y 1930 –cuando la crisis económica mundial cerró el ciclo de “crecimiento hacia afuera” y puso fin a una breve recuperación de la inversión extranjera–, del propio seno del Estado surgieron actores que cuestionaron los principios centrales del período anterior y promovieron la creación de nuevas organizaciones públicas con funciones novedosas, a la vez que implementaron reformas de magnitud en otras ya existentes.

Como hemos visto, las tendencias desarrolladas durante la década de 1920 también pusieron en cuestión el principio de la subordinación militar al poder civil; la novedad no fue tanto la intervención de militares en conspiraciones contra los poderes institucionales, ni su participación en golpes frustrados. Esos fenómenos ya habían ocurrido antes de la llegada de Alessandri a la presidencia. Lo nuevo a partir de 1925 fue que los militares no esperaron a ser convocados por los políticos y los funcionarios públicos, incluido el presidente, para participar en conspiraciones, y enredarse en las numerosas marchas y contramarchas que caracterizaron los períodos de debilidad institucional, sino que tomaron la iniciativa, poniendo el acento de su crítica, precisamente, en la ilegitimidad del conjunto de la clase política. El maestro en la ejecución de estas jugadas fue, sin duda, Carlos Ibáñez. Las llevó a una suerte de paroxismo de ejercicio despótico del poder en ocasión del llamado Congreso Termal de 1930, cuando la humillación llegó a topes inauditos. Viejos oligarcas y “nuevos” políticos fueron sometidos a la indignidad de verse casi forzados a mendigar un escaño al todopoderoso, y único, elector; la suerte de peregrinación que hicieron a Chillán para entrevistar al general presidente fue una elocuente metáfora del quiebre producido. Recurriendo a la imagen de uno de sus contemporáneos, y por añadidura ferviente admirador del militar, se podría decir que Ibáñez logró someter a la “fronda aristocrática” que había controlado la política chilena desde las postrimerías del siglo XX, gracias a su capacidad de

veto.⁵³ Y de cierta manera, Ibáñez lo había logrado al simplificar el juego político, y dejando atrás la indefinición que había imperado en los años previos, reduciendo las componendas partidarias y los debates parlamentarios a un mero ritual, a una suerte de teatro de marionetas en el cual el dictador movía prácticamente todos los hilos. Sin embargo, para su desgracia, esas manifestaciones de poder no resultaron suficientes cuando la crisis económica se tornó incontenible. Porque en esa coyuntura quedó claro que la arena partidaria no monopolizaba, ni mucho menos, la escena política; cinco años antes se había abierto otra arena que resurgió en ese momento con un impulso avasallador, es decir, la arena militar. Y claro, en ella imperaba, como siempre, una regla de hierro: apostar al perdedor genera consecuencias irreversibles para la respectiva carrera individual. Es decir, mientras que en las carreras partidarias los errores de cálculo, así como las eventuales derrotas, obviamente tienen consecuencias para quienes los cometen, generalmente no son tan graves como para un oficial militar, cuando este se equivoca y apoya al bando perdedor en cualquier conflicto.

En todo caso, a medida que transcurrían los meses entre 1930 y principios de 1931, la oficialidad comenzó a percibir el acre perfume de derrota que despedía el otrora todopoderoso dictador. A pesar de haber dejado el ministerio de Guerra en 1927, y por lo tanto, carecer de la posibilidad del ejercicio del mando de tropas, o por lo menos, de controlar de cerca a la oficialidad, Ibáñez no había perdido la lealtad de muchos militares. Algunos de los más cercanos al presidente, quizás porque su suerte estaba indefectiblemente ligada a la de Ibáñez, le recomendaron que acentuara la represión para contener las protestas de estudiantes, médicos y otros profesionales que se multiplicaban; otros, en el extremo opuesto, se embarcaron en aventuras golpistas, que bordearon el ridículo, como su antiguo amigo Marmaduke Grove, quien pretendió liderar un golpe desde un “avión rojo”, que era en realidad una avioneta, en la ciudad de Concepción. Pero lo que importaba, claro está, era la mayoría de oficiales que no se movían y esperaban. Y cuando el dictador evaluó que la mayoría silenciosa dentro de la oficialidad no lo apoyaría, abandonó el gobierno.⁵⁴ A esa altura ya se habían producido varios intentos de golpe, había explotado un desempleo masivo –los trabajadores en el salitre, por

53 Alberto Edwards. *La fronda aristocrática*. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1928.

54 En una carta enviada a un colaborador, Ibáñez reconoció que en las consultas que hizo antes de su renuncia, se le había informado que “... en general, la oficialidad joven simpatizaba con la causa de la anarquía libertaria”. Citado por Felipe Portales. *Los mitos de la democracia chilena. Volumen II. Desde 1925 a 1938*. Santiago de Chile, Catalonia, 2010, pp. 145 y 151, quien además señala correctamente que los muertos por la represión de los carabineros en las protestas antes de la renuncia del presidente, fueron en verdad doce. La alternativa era la represión masiva que, según Correa, Figueroa, *et al.*, fue lo que le ofreció su amigo y ministro de Guerra, el general Blanche. (Cf. Sofía Correa *et al. Historia del siglo XX chileno, un balance paradójico*. Santiago de Chile, Sudamericana, 2001). Ibáñez rehusó disponerla.

ejemplo, cayeron de 60.000 a 16.500–, la corrida contra el peso había agotado las reservas en oro del país –Ibáñez se rehusó a disponer la inconvertibilidad de la moneda lo que hubiera sido mucho más sensato– y un par de muertos habían ensangrentado las protestas.⁵⁵

La caída de Ibáñez, el disloque en la superficie y el retorno a la “normalidad”

Si leemos superficialmente los eventos de los quince meses posteriores a la caída de Ibáñez, y nos dejamos influenciar por la vorágine de los cambios de gobierno y algunos titulares impactantes, como el advenimiento de la República Socialista, la creación del Comisariato de Subsistencias y Precios y el surgimiento de la pro-fascista Milicia Republicana, podríamos concluir en que Chile se encaminaba, a principios de la década de 1930, hacia un proceso de disolución irreversible, alimentado por un enjambre de proyectos políticos estrafalarios, algunos de ellos de clara raigambre autoritaria, e inducidos por un deterioro económico que, como se ha destacado *ad nauseam*, hizo de Chile el país más gravemente afectado por la depresión en todo el mundo. Pero ese fue un espejismo. En realidad, lo que sucedió fue que se ingresó en un interregno en que la política quedó dislocada de la sociedad, es decir, el régimen quedó girando como una rueda loca con escasa capacidad para influir sobre los procesos económicos y sociales. A su vez, el Estado, claro está, quebró y la falta de recursos puso en cuestión, en el límite, su pretensión del ejercicio monopólico de la violencia legítima. Pero bajo la superficie vertiginosa de los eventos políticos, la sociedad chilena se estaba reequilibrando de manera sostenida y en ese proceso la política oligárquica, la punta del iceberg de un patrón de dominación social, afloró nuevamente, indemne y a la vez redefinida. Esta redefinición iba a relegar a la penumbra las contiendas intra-oligárquicas por el control del voto, como así también dejaría atrás el activismo militar de los años previos, definido como la “Honorable Misión” de regeneración de la política. El patrón de intervencionismo militar activo fue reemplazado por un rol menos visible de las fuerzas armadas, como guardianes, en última instancia, del orden social capitalista y oligárquico, que serviría para preservar a las fuerzas armadas del desgaste que habían sufrido durante la década previa.

El síndrome de política dislocada se evidenció de múltiples modos: en los permanentes cambios de gobierno, tanto constitucionales como originados en *putschs* de variadas orientaciones, en el fluctuante apoyo de diferentes facciones de

55 Al marcar las contradicciones de la política económica del período ibañista, Hirschman, con la agudeza que siempre lo caracterizó, repara en que, además de la caída de los precios de las exportaciones, una de las razones adicionales que explicaron la violencia con que la crisis afectó a Chile, fue la “... errada obstinación con que se defendió el patrón oro. ...En contraste con países como Brasil, Argentina, Uruguay y México que pragmáticamente optaron por técnicas ‘reflacionarias’, o tropezaron con ellas, Chile siguió estrictamente las famosas ‘reglas del juego’ hasta mediados de 1931” *Journeys Toward Progress*, p. 240).

los militares a uno y a otro pretendiente, y en los constantes cambios de posiciones de la mayoría de los políticos. Lo resumieron gráficamente Loveman y Lira:

Sin entrar en complejidades, hubo seis gobiernos entre el 4 de junio de 1932 y el 14 de septiembre del mismo año: 4 de junio, Dávila, Puga, Matte; 13 de junio, Puga, Matte, Merino; 17 de junio, Dávila, Cárdenas, Cabero; 30 de junio, Dávila, Cárdenas, Villalón; 8 de julio, presidencia provisional de Dávila; 14 de septiembre, presidencia provisional de Blanche.⁵⁶

Pero el *carrousel* de presidentes poco tenía que ver con la sociedad chilena y la búsqueda de un reacomodamiento que preservara la dominación social, controlando los nuevos desafíos que enfrentaba, que estaban apareciendo también en el ámbito rural, e hiciera frente al derrumbe del modelo exportador.

Asimismo, las organizaciones públicas, que habían jugado un papel tan central en los años previos, se convirtieron, claro está, en organizaciones de un Estado en bancarrota. Por lo tanto, privadas de recursos, la mayoría de las políticas públicas perdieron el modesto grado de autonomía que habían adquirido en relación con las clases de grandes propietarios, desde 1927 en adelante. Esta reversión facilitó un proceso de colonización del Estado por parte del sector privado, que en muchos casos resultó de la aplicación literal de las leyes de creación de los nuevos organismos, ya que estas, por lo general, otorgaban una representación mayoritaria al sector privado en los respectivos directorios. Pero, en realidad, el fenómeno que, en mayor medida, facilitó la pérdida de poder del Estado fue el relegamiento que sufrieron los técnicos que habían estado asociados al gabinete de Pablo Ramírez. Algunos de ellos fueron cooptados por empresas privadas y otros, la mayoría, se replegaron a puestos secundarios del sector público.

56 Cf. *Las suaves cenizas del olvido*, p. 288. Por su parte, Arturo Alessandri representó, nuevamente, un excelente ejemplo de las idas y vueltas de un político paradigmático... y pragmático. En 1931, se presentó a las elecciones presidenciales supuestamente representando a la "izquierda". Obtuvo el 31% de los votos frente al 64% del candidato que representaba a la "derecha", Juan Esteban Montero, un radical extremada y consistentemente conservador, apoyado por la maquinaria de los partidos tradicionales y del gobierno. Los restantes votos, que no fueron más que 3.700, se repartieron entre los candidatos efectivamente de izquierda, uno comunista y otro trotskista. Cabe anotar que esa era la etapa en que el partido Comunista chileno, encolumnado disciplinadamente en el naciente stalinismo, estaba todavía siguiendo la línea del VI Congreso de la Internacional Comunista, que había profundizado la estrategia de la "lucha de clase contra clase", lo que implicaba no solo combatir al capitalismo, sino también a las otras vertientes de la izquierda, es decir, al trotskismo y a los partidos socialistas. Cf. Olga Ulianova. "El partido comunista chileno durante la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931)", *Boletín de la Academia Chilena de Historia* 68, pp. 111, 2002. Retornando a Alessandri, un año y medio después, esta vez como el principal candidato de la "derecha", triunfó con el 54,8% de los votos, frente a Marmaduke Grove, ordenadamente caratulado como el candidato de la "izquierda" y que permaneció confinado en la Isla de Pascua hasta el día de la elección, por las dudas, habrá pensado nuestro servicial Ramón Zañartu, recibiendo el 17,7%, dos candidatos de los partidos tradicionales, Liberales y Conservadores, quienes, "saludando a la bandera", reunieron el 26% y el Comunista Lafferte, que esta vez superó los 4.000 votos.

Otra manifestación de los procesos más profundos en la sociedad chilena fue la intensificación de las acciones de control y persecución de los sectores subalternos, abarcando a quienes, presunta o efectivamente, los representaban y defendían, como sindicalistas, periodistas, profesores y estudiantes universitarios, especialmente cuando, tanto los trabajadores como quienes lo apoyaban se decían comunistas, o eran sospechados de serlo. La persecución se intensificó sobremanera, y esto no fue accidental, en el momento en que la crisis económica se tornó más aguda, es decir, a partir de la caída de Ibáñez, en julio de 1931. Cómo sucedió en otros países de América Latina y Europa, los comunistas se convirtieron, junto con los judíos, en un conveniente chivo emisario, al ser acusados de estar fomentando la disolución social, aprovechando el clima de descontento. Esta acusación, que en cualquier caso ya era bastante seria, se convirtió en una sentencia con graves consecuencias para muchos ciudadanos en países como Chile, donde el partido había logrado una importante penetración en las respectivas clases trabajadoras.⁵⁷ La agudización de la represión en parte se vinculó con el perfeccionamiento y extensión de las herramientas de los carabineros para implementar tareas de inteligencia, amedrentamiento y coacción, y con la sanción de leyes de seguridad y de mantenimiento del orden público, que suspendían las garantías y derechos individuales.⁵⁸ Pero, además, las acciones represivas legales fueron suplementadas por la multiplicación de detenciones, desapariciones y asesinatos de militantes comunistas, y otros supuestos de serlo, a manos de grupos parapoliciales y paramilitares.⁵⁹ La denominada Milicia Republicana, que alcanzó los quince mil miembros, fue incluso apoyada por Arturo Alessandri, cuando ya había retornado a la presidencia en 1933.⁶⁰ Lo paradójico del apoyo del titular del poder ejecutivo fue que, según Vial, la intención de Alessandri de darle aire a la milicia fue “poner definitivamente en su lugar” a los militares.⁶¹ En

57 Nuevamente resulta pertinente la comparación con Alemania donde, como es sabido, la persecución policial y parapolicial a militantes comunistas fue un fenómeno anterior a la llegada de Hitler al gobierno.

58 La primera de esas disposiciones fue el Decreto Ley N° 50, de junio de 1932, decidido por una junta en la cual el hombre fuerte era Carlos Dávila, un político que había compartido el gobierno de la “República Socialista” con Marmaduke Grove hasta una semana antes de la sanción del decreto.

59 En Vallenar, por ejemplo, fueron masacrados 23 o 32 presuntos comunistas, la mayoría obreros, a manos de carabineros que los torturaron y arrojaron a una fosa común. En la investigación no se permitió exhumar los cadáveres, lo que explica la controversia acerca del número de asesinatos. Ningún carabainero fue condenado. Cf. Felipe Portales. *Los mitos de la democracia chilena. Volumen II. Desde 1925 a 1938*, p. 168.

60 Otros observadores menos cuidadosos, quizás, estimaron que la Milicia llegó a congregarse a 50.000 miembros. Gonzalo Vial anotó que “Don Arturo la alentó de comienzo, llegando hasta arengarla desde los balcones de la Moneda en su primer desfile. Y luego, momento crucial, le hizo un traspaso masivo de armas, tomadas de los arsenales del Ejército: ametralladoras, fusiles-ametralladoras, 12.000 fusiles y más de un millón de cartuchos”. (Cf. *Op.cit.*, p. 1102).

61 Vial también señala que Alessandri dispuso el retiro de todo el generalato, entre los cuales había

resumen, el presidente, en su búsqueda de reforzar el régimen político y restaurar el principio de subordinación de los militares a las autoridades civiles y constitucionales, cuya cúspide ocupaba en este caso él mismo, estaba de hecho, debilitando a una institución fundamental del Estado chileno en los cien años previos. Pero, como analizo en el punto siguiente, la anomalía duraría muy poco tiempo. Una vez purgados los oficiales cercanos a Ibáñez, Alessandri retornó a los cauces tradicionales de la política chilena y comenzó a ubicar al ejército en el papel que desempeñaría con celo ejemplar en el medio siglo siguiente, es decir la represión de los comunistas y la prevención de la llegada de la izquierda a la presidencia.

Los legados de la década turbulenta y el retorno a la “normalidad” plena

Las primeras acciones de Alessandri brindaron una imagen bastante precisa sobre la dirección de los procesos que se desplegaron cuando se agotó el espasmo expansivo a raíz de la crisis económica mundial: en principio, un repliegue del Estado, poniendo fin al período de avances en varias esferas de la regulación pública de lo económico y social, que se había extendido en los años previos. Ejemplos de este retroceso fueron la anulación de concesiones de tierras a pequeños campesinos, que habían sido promovidas por el gobierno de Ibáñez, y la falta de aplicación de las disposiciones del Código del Trabajo, sancionado en mayo de 1931, en el ámbito rural.⁶² Este repliegue tuvo, a su vez, una contracara: la reconstrucción del régimen político, restaurando la centralidad que los partidos habían tenido hasta 1924, pero incorporando, claro está, los legados de la agitada década que quedaba atrás. ¿Cuáles fueron estos legados?

• El personalismo bicéfalo

El énfasis que se ha puesto en la centralidad de los partidos políticos ha tendido a oscurecer el papel que jugaron Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo a partir de 1932. Le agregaron a la política nacional un componen-

muchos que habían apoyado a sus adversarios, principalmente a Ibáñez, y redujo las plantas de oficiales y el presupuesto militar. *Ibidem*.

62 Un par de años más tarde, la contramarcha en relación al otorgamiento de tierras en una comunidad cercana a Lonquimay, en la región de la Araucanía, resultó en la matanza de Ranquíl. Alessandri anuló un decreto de Ibáñez, que había cedido las tierras ocupadas de hecho por empresarios rurales de origen alemán a cientos de campesinos de origen mapuche y criollo, y les restituyó las tierras a los terratenientes. Esto ocasionó una serie de motines y protestas de los campesinos en los que fueron asesinados guardias privados y pulperos. La orden a los carabineros para ejecutar la represión, replicando el estilo aplicado a los trabajadores del salitre durante las décadas anteriores, tuvo un resultado previsible: cientos de muertos, la mayoría masacrados después de rendirse. Los cadáveres de muchos de los campesinos asesinados, incluyendo familias enteras, fueron arrojados al río Bío Bío.

te esencial durante las siguientes tres décadas, el de un personalismo que actuó como una especie de válvula de escape, de una *fuite en avant*, que imaginaria y recurrentemente, sustentó la ilusión de muchos chilenos de que un personaje providencial, recurriendo a la mano dura, podría resolver los problemas supuestamente generados por políticos que perdieron todo prestigio por ser visualizados como ineficientes y sedientos de poder. La peculiaridad chilena fue que en vez de uno fueron dos los personajes que ocuparon alternativamente esa posición y, además, coexistieron con partidos que, excepto durante el período de la breve dictadura de Ibáñez, mantuvieron su cuota de poder.

Alessandri, ya maduro, no solo retornó a la presidencia en 1932, sino que una vez concluido su período, seis años más tarde, mantuvo, aunque solo parcialmente, el rol de articulador de los arreglos debajo de la mesa y de las permanentes contramarchas que caracterizaron a la política chilena bajo los tres presidentes Radicales que lo sucedieron hasta su muerte, en 1950. En tal sentido, del retrato biográfico de Ricardo Donoso, que lo pintaba de manera poco elogiosa como un permanente “agitador y demoleedor”, solo se debe retener el primero de los adjetivos. Porque, de hecho, a partir de 1932, el ya veterano político se transformó en un eficaz *reconstructor* del edificio, que parecía haberse derrumbado en los turbulentos años previos. Después de concluir normalmente su período presidencial en 1938, fue electo dos veces senador, fue precandidato a presidente en 1946 –retiró su candidatura cuando su hijo Fernando se transformó en el abanderado de los Liberales, en una zancadilla que un astuto adversario interno le puso al padre– y falleció siendo presidente del Senado. Pero, quizás lo más interesante de la fase final de su larga carrera fue que su aura como adalid de la política por fuera de los partidos, que lo había caracterizado en la década de 1920, se transmitió a uno de sus hijos, Jorge Alessandri Rodríguez. Al menos tres de sus parientes de la siguiente generación actuaron en la política nacional, incluidos otro de sus hijos y su yerno, Arturo Matte Larraín; pero fue Jorge quien perfeccionaría el estilo paterno para alcanzar él también las cumbres del régimen político, una vez como presidente y en otra ocasión, ya derribada la democracia, pues llegaría a ocupar posiciones de influencia durante la dictadura de Pinochet. Jorge Alessandri cultivaría más sistemáticamente la veta antipartido de su padre, pero recubriéndola de una pátina de técnico aséptico y empresario eficiente; las dos veces que se presentó como candidato presidencial lo hizo como “independiente” apartidario.

Ibáñez, por su parte, no cesaría de perseguir la presidencia, con un empeño que no se debilitó a pesar de que pasaban los lustros demostrando, como siempre, su escasa preocupación por el ropaje ideológico que envolvía sus postulaciones al alto cargo. En 1938, fue asociado vagamente al partido Nacista, en 1942 fue apoyado por Conservadores y Liberales, y en 1952

aspiraría al cargo máximo como candidato de una alianza multipartidista que abarcó desde la derecha antipartido hasta la más numerosa facción del Socialismo.⁶³ El corolario de esta empeñosa búsqueda sugería que la mayoría de los chilenos estaban tan preocupados como él por las cuestiones ideológicas, pues efectivamente en el último año “barrería” a sus adversarios, esgrimiendo como símbolo de su enésimo embate contra los partidos tradicionales... la escoba. Justamente a partir de 1949, el *establishment* partidario estaba atravesando otro de sus nadires, a raíz del fracaso de las políticas de corte ortodoxo y antiinflacionista, que el presidente González Videla llevó adelante, en consonancia con la proscripción del comunismo y el confinamiento de dirigentes y militantes al que lo autorizó la Ley de Defensa de la Democracia. El “caballo” volvió por su fueros, a partir de su elección de senador por Santiago en 1949, y pudo disfrutar de una nueva revancha con el clan Alessandri, pues su principal contendiente en las elecciones presidenciales de 1952, no fue otro que el yerno del entonces recientemente desaparecido “León de Tarapacá”, Arturo Matte Larraín, al que derrotó por una diferencia de casi veinte puntos porcentuales. Claro que seis años más tarde tendría que soportar el amargo trago de cederle el bastón presidencial al hijo de su eterno enemigo, quien inauguraría de tal modo, el último episodio de esta peculiar modalidad de bicefalía.

La larga vigencia del fenómeno personalista, paradójicamente, no fue ajena a su fracaso. El personalismo presidencial de la etapa predemocrática nunca llegaría a cuajar en fórmulas en las cuales efectivamente la mano dura resolviera los problemas, cada vez más complicados, a los que se enfrentó la economía chilena a partir de que se vino abajo el mundo del *laissez faire*. Más bien, actuaría como válvula de escape temporaria, cuando el sistema de partidos revelara nuevamente su ineficacia para resolver las tensiones sociales generadas por los conflictos distributivos. Chile permaneció en una situación de semi-estancamiento durante las décadas siguientes, a pesar de que el Estado amplió selectivamente el paraguas rentístico para cobijar a los industriales que sustituyeron importaciones.

En todo caso, sería en 1952, con el “terremoto ibañista”, que el fenómeno del personalismo reaparecería con todo su vigor, para disiparse en pocos meses. Ibáñez fue, durante los últimos cinco años de su mandato sexenal, un *lame duck*.

63 En 1938 Ibáñez renunció a su candidatura y apoyó al postulante del Frente Popular, Aguirre Cerda, después de la matanza del Seguro Obrero, en la cual decenas de militantes nacistas fueron asesinados después de que se rindieran al haber fracasado una rebelión que protagonizaron. Fue una dulce venganza de Ibáñez en contra de Alessandri, pues el retiro de su candidatura permitió que Aguirre Cerda venciera al candidato de Alessandri, Gustavo Ross, por la mínima cifra de 4.111 votos.

• La institucionalización del anticomunismo

Otra herencia del período 1920-1932 fue que, desde la perspectiva de las clases dominantes, el problema del comunismo se tornó más complejo y más grave. A la amenaza que representaban los trabajadores, muchos de cuyos dirigentes militaban en las filas del comunismo, se sumó la capacidad del partido para convertirse en una fuerza electoral relevante, rasgo que se manifestaría, cada vez más, a partir de 1938. En las elecciones parlamentarias de 1941 y 1945, bajo las denominaciones de Nacional Democrático y Progresista Nacional, el comunismo superaría holgadamente el 10% de los votos y llegaría a su máxima votación en las municipales de 1947, pocos meses antes de su ilegalización, cuando, para alarma de los partidos tradicionales y las elites, obtuvo el 16,5%.⁶⁴ Asimismo, el partido participaría en las tres coaliciones presidenciales triunfantes a partir de 1938, contribuyendo decisivamente a la victoria de los candidatos Radicales, especialmente en la primera y en la última de las tres.

Entonces, si hasta prácticamente mediados de la década de 1920, el problema comunista había sido casi exclusivamente una cuestión policial, a partir de esa coyuntura, sin que se atenuaran las prácticas represivas, se convirtió también en un tema que requeriría tratamientos adicionales, en particular el legal. En consecuencia, desde esos años se irían sumando disposiciones que impedían al comunismo participar en las elecciones, o le fijaban serias restricciones a dicha participación, y leyes “de seguridad interior” que disponían estados de excepción, en los cuales los miembros y simpatizantes del partido eran invariablemente perseguidos con mucha más saña que el resto de los chilenos. El crescendo, admirablemente reseñado por Carlos Huneeus, culminaría, por supuesto, con la sanción de la Ley de Defensa de la Democracia.⁶⁵ Loveman y Lira no se equivocan cuando subrayan que las leyes dictadas en la década de 1930 constituían un retorno al pasado y no un presagio del futuro. Más que anunciar un adelanto de la Guerra Fría, evocaban la resurrección de la tradición de la Inquisición y de las reformas borbónicas del siglo XVIII. El Decreto Ley 50, en particular, dictado por Carlos Dávila una vez que expulsó a Grove del gobierno como ya apunté, establecía la jurisdicción militar sobre los delitos cometidos por civiles y militares conjuntamente y para delitos que afectaban la paz social y el orden constituido. Estos “delitos”, por cierto, incluían las “huelgas con violación de las disposiciones legales que las rigen”.⁶⁶

64 En las elecciones municipales de 1947, fue la única ocasión en la cual el partido Comunista pudo sortear el celo persecutorio de nuestro inefable Zañartu, pues si bien el director del Registro Electoral reiteró la negativa a registrarlo, la apelación al Tribunal Calificador de Elecciones resultó exitosa, por lo cual pudo presentarse en ese caso con su nombre. Cf. Carlos Huneeus. *La Guerra Fría Chilena. Gabriel González Videla y la ley maldita*. Santiago de Chile, Random House Mondadori. 2009, p. 80.

65 *Ibidem*.

66 Brian Loveman y Elizabeth Lira. *Las suaves cenizas del olvido*, p. 303.

• Los partidos nacidos en la crisis: la Falange y el Socialismo

En el fragor de la crisis, que estalló en 1931, surgió un nuevo estilo de militancia partidaria que difería de los estilos tradicionales de los partidos del siglo XIX, es decir, los Conservadores, Liberales, Radicales y Demócratas, y tampoco estuvo asociada a un proceso de inserción masiva en la clase obrera, hito que los Comunistas sí habían alcanzado, a pesar de que muchos de sus mensajes se dirigían a los trabajadores. Sus cultores eran, por lo general, estudiantes universitarios que hicieron sus primeras experiencias políticas en las manifestaciones en contra del dictador Ibáñez. La mayoría de los que provenían de la Universidad de Chile se inclinaron por diferentes versiones del marxismo que rechazaban, a veces violentamente, la ortodoxia de la III Internacional, mientras que los de la Universidad Católica, a menudo respondiendo a la convocatoria de la jerarquía eclesiástica, adhirieron a un social cristianismo que comenzaba a erigir algunos íconos intelectuales que les sirvieron de guías espirituales. Los nuevos partidos funcionaron en buena medida, como religiones políticas, aunque uno de ellos, el Socialista, fundado por quienes se habían embarcado en la experiencia de los doce días de la República, de junio de 1932, proclamara su laicismo. Fue este, en verdad, un caso extraño, quizás único en el mundo: un partido socialista nacido al calor de un golpe militar. La Nueva Acción Pública, el más importante de los grupos que confluyeron en el partido, propuso a través de su máximo dirigente, el Gran Maestre de la Masonería Eugenio Matte, una síntesis de marxismo adaptado a las condiciones nacionales y no sujeto a ningún internacionalismo —o sea independiente del partido Comunista de la Unión Soviética— y una convocatoria a los trabajadores manuales e intelectuales, que tuvo más eco en los segundos que en los primeros.

En cambio, la Falange que formalmente recién se creó en 1935, mantuvo durante más de una década un difícil y contradictorio equilibrio entre su pertenencia al partido Conservador y la adhesión a una postura “ni capitalista ni comunista”, como lo planteaba Manuel Garretón Walker, quien fue uno de los fundadores junto a Bernardo Leighton, Eduardo Frei Montalva e Ignacio Palma. Esta circunstancia estaba vinculada con su heterogeneidad interna que, a pesar de que continuó manifestándose a lo largo de su historia, incluso cuando se transformó en un partido independiente como Democracia Cristiana, nunca generó el fraccionamiento que caracterizó al socialismo.

Socialistas y Falangistas, los primeros con algo más de repercusión en el plano electoral, participaron activamente en el juego partidario restrictivo de las siguientes dos décadas. Pero siempre como actores secundarios, aunque sus dirigentes fueran integrantes de diferentes gabinetes a lo largo del período, como Eduardo Frei y Salvador Allende, entre otros. En cambio, a partir de 1958, cuando el electorado se expandió más allá de los ínfimos niveles de la primera mitad del siglo XX, los dos partidos se transformaron en activos con-

tendientes por la presidencia. Cuando sus principales líderes, los mismos Frei y Allende, la alcanzaron, protagonizaron sucesivamente los asaltos definitivos a las murallas de la sociedad oligárquica —es decir la reforma agraria dentro de la llamada “Revolución en Libertad” y el programa no capitalista de la Unidad Popular—. Claro está, las inéditas movilizaciones que unos y otros generaron, provocaron, a su vez, la reacción que culminó con el golpe de 1973 y la revolución capitalista desde arriba, que comandó el general Pinochet.

• **Los guardianes en última instancia del orden social: fuerzas armadas más cautelosas**

Los militares chilenos fueron probablemente los que hicieron el aprendizaje más provechoso del desenfreno de los años previos a 1932, desenfreno del que habían sido los más sostenidos cultores. Fuera bajo el viejo estilo de sus superiores de orígenes más aristocráticos o seducidos por las prédicas de líderes carismáticos como Ibáñez y Grove, en la década de 1920, los oficiales del Ejército y la Marina hicieron aflorar a la superficie de la escena política tensiones que en los treinta años previos solo se habían manifestado como conatos de golpes, amenazas de intervención e incluso conjuras que bordearon el ridículo. A partir de 1924, si bien algunas de sus intervenciones, especialmente las que se hicieron bajo el influjo ibañista, aludieron a la vocación militar de extirpar “la gangrena de la política”, todas terminaron por recurrir, aunque fuera como mascarones de proa, a los políticos partidarios. Por ello, casi inevitablemente, muchos oficiales no pudieron evitar asociarse, o aparecer asociados, a uno o a otro partido o corriente de opinión, y como resultado, el faccionalismo partidario contagió, tarde o temprano, a las fuerzas armadas.

Una vez concluido el episodio de la República Socialista, en cambio, los militares, excepto algunos oficiales sin poder de convocatoria, evitaron inmiscuirse en las disputas interpartidarias y cesaron de reclamar la abolición de la política partidaria, con la consigna de apoyo al ascenso de algún oficial providencial a la presidencia. Esto no implicaba que abrazaran la defensa de los valores democráticos y republicanos, convirtiéndose en burócratas uniformados y armados, que respetaban el principio de subordinación a los poderes civiles. Más bien, adoptaron una estrategia de relativa cautela de acuerdo con la cual se concibieron como la última línea de defensa de los valores nacionales y del orden social heredados del siglo XIX, valores que ciertamente trascendían a las instituciones políticas. La definición del “comunismo internacional”, y sus agentes en Chile, como el enemigo a batir, se convirtió en el eje de esta estrategia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, claro está, la plena convergencia de esta línea del pensamiento militar con los intereses estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos en relación con América Latina, y en particular con Chile, reforzaría aún más su vigencia.

• Los ingenieros de Estado

Sin duda, uno de los principales legados de la década agitada de 1920 fue la conformación de un *ethos* estatista, que en buena medida fue la destilación de la prédica y de la labor de Pablo Ramírez y la media docena de sus asociados más prominentes. Esto no significa desconocer que antes de la llegada al gobierno de “los jóvenes orates” no hayan existido funcionarios y políticos que promovieron el desarrollo de nuevas funciones a cargo del Estado; sin embargo, lo fueron *à leur insu*. El predominio del *laissez faire* despótico, como ya subrayé, había producido un monopolio de legitimidad por parte de las visiones en las que la intervención del Estado era concebida como un mal en sí mismo que interfería en el desarrollo de las fuerzas “naturales” del mercado.

Ramírez y sus *boys*, por el contrario, concebían al Estado como una palanca necesaria para sacar a Chile de la situación de “inferioridad” en que se encontraba. Y aprovecharon los abundantes recursos públicos generados por el último auge exportador del salitre y la disponibilidad de créditos norteamericanos en la segunda mitad de la década de 1920, para tratar de encarrilar al país en la nueva vía. Al poner el énfasis en el mérito en vez del estatus social, claramente arremetieron contra uno de los pilares del Estado oligárquico, contribuyendo a erosionar su legitimidad. Claramente estaban en favor de que el acceso a las posiciones decisorias en la cúpula estatal no fuera un resultado de vinculaciones familiares o de clan, sino del dominio de un tema relevante fundado en el conocimiento técnico o científico.

Es decir, los técnicos inspirados por Ramírez criticaron que el acceso al Estado se fundara en el criterio de que “los mejores” fueran definidos por sus orígenes de clase (obviamente aristocrático). Pero eso no significó que compartieran la idea de que el poder de decisión en el Estado estuviera fundado en el voto. Su asociación con el naciente ibañismo sugería, por el contrario, que su ideario no tenía nada que ver con la democracia. Sus posturas tenían un antecedente más que centenario: el autoritarismo ilustrado que, de algún modo, había inspirado el lema del escudo nacional de la Patria Vieja carrerista en 1812: *aut consiliis aut ense*.⁶⁷ En 1920, casualmente, el original en latín fue oficialmente traducido al castellano, renovando el atractivo de un lema que privilegiaba la *razón* del conocimiento (o de la *expertise* técnica, para ponerlo en términos del nuevo siglo) y la *fuerza* de la espada. Así como la fuerza se encarnó en el Coronel Ibáñez, la *expertise* encontró convincentes protagonistas en los técnicos que ganaron prominencia en 1927. Concluida la dictadura, la mayoría de ellos se sumergiría en puestos secundarios del sector público,

67 José Miguel Carrera fue dos veces dictador de Chile, entre 1812 y 1814, cuando los realistas españoles batieron a los ejércitos patriotas y reconquistaron la región. Terminó siendo ejecutado en 1821 por orden de San Martín y O'Higgins cuando, por enésima vez, desarrollaba una conspiración en contra del segundo.

durante la segunda presidencia de Arturo Alessandri, para reaparecer con renovada energía en el gobierno del Frente Popular en 1938, con la subsiguiente creación de la CORFO.

El ocaso y el paradójico éxito de la oligarquía: un desenlace no democrático.

En la década de 1920 se generaron las condiciones para un viraje profundo de la política chilena. Pero este viraje no produjo una transición a la democracia en la década siguiente, como muchos analistas han sugerido. Estos analistas han tendido a sobrevaluar, como el ya citado Gonzalo Vial, la restauración de la periodicidad regular de los calendarios electorales a partir de fines de 1932. Ese tipo de interpretaciones no tuvo en cuenta que los rasgos excluyentes del régimen oligárquico no fueron abolidos. El electorado permaneció congelado y las llaves de los candados a la participación campesina siguieron en manos de la oligarquía terrateniente y sus personeros.

Más aún, las desigualdades no disminuyeron a pesar de las medidas de fomento a la demanda que impulsó el ministro de Hacienda de Alessandri, Gustavo Ross. De todas maneras, las iniciativas de promoción industrial que encaró Ross estuvieron teñidas de un marcado particularismo.⁶⁸

La normalización institucional producida en aquel año, de todas maneras, implicó un reequilibramiento de la política chilena en un nivel de mayor complejidad. El reequilibramiento se alcanzó sobre la base de integrar selectivamente los legados de la década previa que describí en el punto anterior.

Arturo Alessandri probó ser una eficaz bisagra entre las dos décadas. Su retorno a la presidencia, ya como un “león domado”, es decir apoyándose en los partidos tradicionales, Liberales y Conservadores, le permitió negociar con los Radicales una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar leyes más importantes, en particular las que le otorgaban facultades extraordinarias.⁶⁹ Las leyes de excepción, que casi siempre tenían como blanco a comunistas, socialistas e ibañistas, combinadas con la lenta recuperación de la actividad económica, permitieron asimismo mantener niveles de represión salarial que beneficiaron obviamente a los empresarios.

68 Al respecto, una interesante ilustración de la discrecionalidad con que se manejaron los apoyos a la industrialización en el período, conviene repasar el relato que hace Peter Winn de la instalación de la fábrica textil de Juan Yarur, un palestino emigrado a Bolivia que fue invitado a fundar una industria en Chile por Gustavo Ross. Cf. *Weavers of Revolution. The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*. New York, Oxford University Press, 1986.

69 Como señala Felipe Menéndez Avila, el resultado fue “la intensificación de la censura de prensa y la represión política”. Cf. “Las prácticas partidistas bajo la Constitución de 1925: la relativización del presidencialismo chileno”, *Hemiciclo. Revista de Estudios Parlamentarios* 2:3 (Segundo semestre de 2010).

Pero el otro ingrediente esencial del reequilibramiento de la década de 1930 fue la constitución de la izquierda, como una fuerza política significativa. En particular, la creación del partido Socialista generó una nueva dinámica en la política chilena, ya que instaló la posibilidad de una alianza con los comunistas, con el potencial de convertir a la izquierda en una fuerza de peso. Efectivamente, en las elecciones parlamentarias de 1941, sumando ambas corrientes, la izquierda alcanzó el apoyo de casi una tercera parte del electorado.⁷⁰ El abandono, por parte del partido Comunista, de la estrategia de la “lucha de clase contra clase”, la gestación del Block de Izquierdas en 1935 y la posterior formación del Frente Popular, incluido el triunfo en la elección del Radical Pedro Aguirre Cerda como presidente en 1938, parecieron abrir la puerta de una estrategia conjunta de socialistas y comunistas. Sin embargo, la estrategia conjunta nunca fraguó y el frente solo existió en el papel; la realidad fue enteramente opuesta. Desde el principio, el antagonismo entre ambos partidos se planteó sin embozos; cada uno se convirtió en el enemigo a muerte del otro. El sectarismo del partido Comunista, en gran medida, fue un resultado del fiel cumplimiento de las instrucciones que Stalin y sus seguidores en América Latina, monitoreados por el ítal argentino Vittorio Codovilla, les dictaban a los partidos de la región que formaban parte de la III Internacional.⁷¹

Los socialistas, por su parte, eran una heterogénea *melange* de trotskismo, social democracia y militarismo nacionalista, que se mantenía unida, precisamente, por su común rechazo al comunismo de vertiente soviética.⁷² Dentro del socialismo, incluso, surgieron facciones que apoyaron las duras medidas represivas en contra de los comunistas.

La conformación de un espacio de izquierda con un peso significativo tuvo una consecuencia paradójica. En vez de producir políticas que favorecieran la mayor participación política de los sectores populares urbanos y rurales, y la mejoría de sus condiciones de vida, la presencia de los partidos de izquierda contribuyó a legitimar un régimen no democrático y le dio al partido Radical un eficaz instrumento de negociación *vis-à-vis* con la derecha partidaria.

En síntesis, ¿cuál es el eje del argumento que sostengo en este trabajo? Dicho con más precisión, ¿qué fue lo que tuvo de excepcional Chile durante el siglo XX? Porque no se puede negar que militares autoritarios y anticomunis-

70 En las elecciones de ese año, la suma de la votación de los dos partidos superó el 29%.

71 Codovilla, entre otros logros de sus gestiones en Chile que combinó con el rol de comisario político en España durante la guerra civil, tuvo una participación, que no fue irrelevante, en la designación de Pedro Aguirre Cerda como el candidato presidencial del Frente Popular.

72 En ocasión de su segundo congreso celebrado en 1934, el programa partidario reflejaba de manera poco sutil su oposición a los comunistas. El socialismo se declaraba “nacionalista, colectivista, revolucionario y americanista. Aunque afirma el contenido internacional de la doctrina y acción del socialismo no lo disuelve en lejanas perspectivas mundiales”. *Actas del congreso del Partido Socialista*. Santiago de Chile, 25 de diciembre de 1934.

tas, técnicos meritocráticos escasamente preocupados por la democracia y políticos oportunistas, todos ellos en el marco de Estados dirigistas, abundaron en América Latina, y particularmente en Brasil, Argentina y México. Y también resulta evidente que fue en el período de entreguerras cuando se generaron las condiciones internas y externas en las que surgieron y prosperaron las configuraciones políticas y sociales para que ello ocurriera en países, como los cuatro mencionados, en los que se había producido una vigorosa integración al mercado mundial bajo la égida oligárquica a fines del siglo XIX.

Lo específico de Chile fue la astucia táctica y la visión estratégica de una oligarquía que trasmutó en clase política. Una oligarquía que, a pesar de que había visto desmoronarse en un par de ocasiones las bases de su poder económico, esto es *circa* 1875 y a fines de la Primera Guerra Mundial, tuvo la capacidad para contribuir de manera decisiva a una serie de reequilibramientos del régimen político y a la formación de un Estado que, en sus sucesivos arranques y repliegues, protegió eficazmente a los grandes propietarios, tanto urbanos como rurales, y disciplinó a las clases subalternas. El reequilibramiento del régimen estuvo asociado a la (re)construcción de un *ordenamiento institucional estable que incluyó restrictivamente* a partidos y corrientes de carácter progresista. Esto es, a partir de 1932, socialistas, comunistas y social cristianos —es decir los falangistas— se incorporaron al juego político electoral, pero a pesar de sus ocasionales éxitos, no tuvieron la capacidad para torcer, ni a través de reformas y menos aún de revoluciones, el rumbo de una sociedad que, en las siguientes tres décadas mantuvo, e incluso reforzó, privilegios y exclusiones en el marco de una *democrazia mancata*.

